



***Edición Especial***

XIII Encuentro Internacional Ciencias Penales 2016  
y Primer Evento Legalidad, Derecho y Sociedad





# LEGALIDAD DERECHO Y SOCIEDAD

No. 4  
Edición  
Especial  
2016

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CUBA

## DIRECTOR EJECUTIVO

Msc. Marlén Fernández Machado

## REDACCIÓN, EDICIÓN Y CORRECCIÓN

Msc. Caridad Sabó Herrera

Msc. Addis L. Ávila Sterling

Lic. Yanisel Bernal Almira

Lic. Jessica Rivero Rodríguez

## DISEÑO GRÁFICO

D.I. Marvin Díaz Valdés

## FOTO

Adrián Lago del Valle

Carlos Pujols Santana

## DIRECCIÓN

Calle 34 e/. 3a y 5a. Rpto. Miramar,  
Municipio Playa, La Habana. CP 11300

**TELÉFONO:** (537) 206 1037

**E-Mail:** caridadsabo@fgr.cu,  
dcinstitucional@fgr.cu

**RNPS:** 2413

**ISSN:** 2414-8431

La Revista Legalidad, Derecho y Sociedad constituye la publicación oficial de la Fiscalía General de la República de Cuba, emitida con una frecuencia cuatrimestral, como continuidad de la Revista Legalidad Socialista. Es un espacio donde se presentan artículos y ponencias, cuyos autores están fundamentalmente vinculados al sector jurídico, así como noticias y secciones con informaciones actualizadas de interés social.

El Consejo de Redacción posee la potestad para realizar cambios relacionados con la estructura, extensión, redacción y estilo de los trabajos, en función de elevar la calidad de los contenidos a publicar.

Los interesados pueden enviar sus trabajos, opiniones y sugerencias a la Redacción de la revista.

# SUMARIO

## NOTA AL LECTOR

Pág. 3

## MEMORIAS DEL XIII ENCUENTRO INTERNACIONAL CIENCIAS PENALES 2016 Y PRIMER EVENTO LEGALIDAD, DERECHO Y SOCIEDAD

Palabras de apertura del Fiscal General de la República de Cuba, Darío Delgado Cura, en el XIII Encuentro Internacional Ciencias Penales 2016 y Primer Evento Legalidad, Derecho y Sociedad  
Pág. 6

Fiscalía General reconoce a Escalona Reguera  
Pág. 9

Resumen de intervenciones especiales  
Pág. 10

Programa científico  
Pág. 21

Ponencias presentadas  
Pág. 25

Actividades colaterales realizadas en el marco del evento  
Pág. 53

Relatoría XIII Encuentro Internacional Ciencias Penales 2016 y Primer Evento Legalidad, Derecho y Sociedad  
Pág. 62

## CONVOCATORIA XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL CIENCIAS PENALES 2018 Y SEGUNDO EVENTO LEGALIDAD, DERECHO Y SOCIEDAD

Pág. 64

## PUEDES ROMPER EL CICLO: ¡NO SEAS VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA!

Pág. 66

## SABÍAS QUE?

Pág. 69

## GLOSARIO DE TÉRMINOS JURÍDICOS

Pág. 70



## NOTA AL LECTOR

**E**n la presente edición de la revista “Legalidad, Derecho y Sociedad”, publicación oficial de la Fiscalía General de la República, ponemos a su disposición las memorias del XIII Encuentro Internacional Ciencias Penales 2016 y I Evento Legalidad, Derecho y Sociedad, que sesionó del 23 al 25 de marzo de 2016, en el Hotel Meliá “Marina Varadero”, de la provincia de Matanzas.

En este cónclave científico participaron más de 300 delegados, entre los que destacan Fiscales y Procuradores Generales, Vicefiscales Generales, estudiantes de pregrado y posgrado de importantes universidades, junto a destacados profesionales del ámbito jurídico, de más de 20 países y organizaciones nacionales e internacionales.

El evento constituyó un espacio para debatir y reflexionar acerca de los problemas actuales del quehacer jurídico, en relación al Derecho Penal, y abordar algunas de las manifestaciones del delito en el ámbito internacional.

La prevención y el enfrentamiento a la trata de personas, el tráfico ilegal de migrantes, el terrorismo, el lavado de capital, la corrupción, la criminalidad organizada, la violencia intrafamiliar y de género, y la protección jurídica de la familia, temáticas de gran vigencia e incidencia en la actualidad, fueron debatidas desde diferentes enfoques jurídicos.

Fueron jornadas de fructífero intercambio de experiencias, que esperamos que contribuyan a la búsqueda de soluciones a las problemáticas que afectan a nuestros países y tienen su expresión en los pueblos.

Agradecemos y brindamos nuestras más sinceras felicitaciones a todos los participantes en este evento, especialmente a los que con sus excelentes intervenciones realizaron importantes aportes al mismo. Aprovechamos este número para convocarlos a participar en el XIV Encuentro Internacional Ciencias Penales 2018 y II Evento Legalidad, Derecho y Sociedad.

En esta edición ponemos a su disposición informaciones de interés, que esperamos contribuyan a elevar la educación jurídica de todos los ciudadanos y promueva el conocimiento de la actividad fiscal a favor de la sociedad y al alcance de todos.

Darío Delgado Cura  
Fiscal General de la República



# PALABRAS DE APERTURA

INTERVENCIÓN DEL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CUBA EN EL XIII ENCUENTRO INTERNACIONAL CIENCIAS PENALES Y I EVENTO LEGALIDAD, DERECHO Y SOCIEDAD.



*Estimados delegados e invitados:*

**E**n nombre del Comité Organizador del XIII Encuentro Internacional Ciencias Penales y del I Evento Legalidad, Derecho y Sociedad, les damos la bienvenida.

Nos llena de satisfacción la presencia de fiscales y procuradores generales, vicesfiscales generales, fiscales, catedráticos, jueces, abogados, asesores, estudiantes de la carrera de Derecho, en fin, amigos y colegas de países de África, Europa, Asia y América. Agradecemos especialmente a los fiscales generales, que a pesar de las situaciones internas que en sus países demandan de su atención, decidieron venir y compartir con nosotros estas jornadas de trabajo, lo que apreciamos mucho, porque es muestra de compromiso y amistad, y ello también lo extendiendo a los que no pudieron hacerlo por diferentes circunstancias, especialmente al Fiscal General del Estado Plurinacional de Bolivia y Presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), Ramiro Guerrero Peñaranda.

Igualmente a los sempiternos amigos, que desde hace 20 años prestigian con su presencia, aportes académicos y éticos, este encuentro internacional, como Eduardo López Betancourt.

Al compañero Homero Acosta Álvarez, Secretario del Consejo de Estado y otras autoridades del Sector Jurídico y académico que con su acompañamiento contribuyen a la obtención de mejores resultados y especialmente a Juan Escalona Reguera, quien fuera

fiscal general de la República, durante muchos años paradigma de estos encuentros a los que tanto contribuyó y aún lo hace.

Por primera vez en la historia de estos encuentros, está presente una representación de la Alianza Estatal de Procuradores Generales de Justicia de los Estados Occidentales de los Estados Unidos.

Son otros tiempos, pero transitamos el mismo camino. Los recibimos en una Patria que es y seguirá siendo soberana, socialista, libre, solidaria y fiel a sus principios, a su Historia y a su Pueblo.

Con este encuentro damos continuidad a un foro científico que cuenta con más de dos décadas de vigencia, y participamos del nacimiento de otro conclave, que permitirá ampliar el alcance en los análisis y debates de los complejos problemas que enfrentan nuestras sociedades y la aplicación del Derecho.

Serán abordadas, entre otras temáticas: la violencia en el seno de la familia, los derechos de los niños y las niñas, los derechos de las mujeres, de las personas con diferentes orientaciones sexuales y color de la piel, las relaciones paterno filiales, el derecho de quejas y de ser atendidos todos los ciudadanos, el envejecimiento de la población, los discapacitados, los graves y peligrosos problemas medio ambientales que ponen en peligro a la especie humana, entre otros y el papel del Ministerio Público en su protección, lo que se fundamenta en la tutela constitucional de estos y en las propias funciones de nuestras instituciones, que no se

limitan exclusivamente al ejercicio de la acción penal pública en representación de los estados.

La constitución cubana, en su artículo 42 refrenda, que “la discriminación por motivo de raza, color de la piel, sexo, origen nacional, creencias religiosas y cualquier otra lesiva a la dignidad humana está proscrita y es sancionada por la ley”.

Por su parte el artículo 127 de la Carta Magna, regula que “la Fiscalía General de la República es el órgano del Estado al que corresponde, como objetivos fundamentales, el control y la preservación de la legalidad, sobre la base de la vigilancia del estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales, por los organismos del Estado, entidades económicas y sociales y por los ciudadanos; y la promoción y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado”.

Desde esta perspectiva, la Fiscalía General de la República de Cuba se encuentra inmersa en un proceso de perfeccionamiento funcional, estructural y de composición, necesario, para cumplir con las exigencias y misiones asignadas a la Fiscalía General de la República, como Órgano del Estado, para el fortalecimiento del orden, la disciplina y la institucionalidad.

Este proceso se inserta y acompaña de diversas formas, la actualización del modelo económico cubano en sus transformaciones en diferentes ámbitos de nuestra sociedad, que demanda el continuo ejercicio legislativo y de promulgación de las normativas jurídicas, que aseguran el marco legal apropiado para el alcance de los objetivos propuestos.

En virtud de lo anterior hemos redimensionado y fortalecido el enfrentamiento a la corrupción administrativa, las ilegalidades, al delito, la atención a los ciudadanos y la protección de sus derechos, para lo cual además de la atención personalizada en las sedes de todo el país, contamos con una línea telefónica las 24 horas del día y recientemente incorporamos al portal web de la Fiscalía general de la República un sitio, a través del cual los ciudadanos pueden establecer quejas ante presuntas violaciones de sus derechos, denunciar lo que consideren o acceder a orientaciones en el ámbito jurídico, asegurándose en todos los casos la privacidad de los planteamientos.

Hemos podido llegar hasta aquí, porque tenemos una Revolución que ha construido una sociedad que debemos defender y que puede ser más próspera, justa e inclusiva de lo que hasta hoy ha sido, con una profunda vocación de justicia y de aplicación del Derecho, en la que sus mujeres y hombres constituyen su prin-

cipal riqueza.

Por ello y por muchas razones más, resulta necesario que nos planteemos los problemas de las Ciencias Penales, no con el objeto de resolverlos de una vez y por todas, sino de continuar evaluando donde estamos hoy en el debate de los mismos, cuáles son los argumentos que sustentan las diferentes posturas o tesis y cuál es la actitud que aquí y ahora pudiera ser más eficaz para lo que necesitamos. En cuestiones importantes como las que nos atañen, no debemos aspirar a más, pero tampoco aspirar a menos.

La existencia del delito es una realidad incontrovertible probablemente desde que el ser humano puebla la tierra. Lo que ha variado a lo largo de los siglos, es como enfrentársele, cómo hacerlo desde la prevención, cómo lograrlo garantizando la seguridad de nuestros pueblos, sin afectar, todo lo contrario, asegurando, los derechos y libertades de nuestros ciudadanos.

Históricamente nos han tratado de demostrar que el Derecho Penal es un derecho de última ratio, lo que no ha pasado de ser en general una aspiración. Nuestras realidades han dado muestras suficientes para asegurar que más bien ha sido, tal vez sin mayores opciones, un derecho de primera ratio. Es más fácil encarcelar nuestras debilidades que solucionarlas oportunamente. La realidad cubana se contrapone a ello.

Como han afirmado Maurach y Roxín “en la selección de los medios estatales de poder, el derecho penal debería ser una verdadera última ratio, encontrarse en último lugar y adquirir actualidad sólo cuando ello fuere indispensable para la conservación de la paz social”.

Para los actores del Derecho Penal, tener entre sus funciones la materialización del *Ius Puniendi* del Estado es una elevada responsabilidad, que debe asumirse con la convicción de que todos somos iguales ante la ley, con una profunda vocación ética, atemperándolo a cada realidad, con racionalidad, inmediatez, severidad cuando resulte necesaria, con apego a los instrumentos internacionales aprobados y con garantías reales.

No tenemos derecho a criminalizar la pobreza, a criminalizar la explotación de los hombres, y sí a buscar otras alternativas que contribuyan a la solución de los problemas.

Preocupa en algunos casos la expansión actual del Derecho Penal y el adelantamiento injustificado de la penalización a conductas; nada autoriza a violar los derechos de nuestros ciudadanos y menos a permitirlo



pasivamente. El equilibrio necesario entre seguridad, tranquilidad ciudadana y derechos individuales, es algo logrado en nuestro país y anhelo permanente en no pocas sociedades.

Nada autoriza a utilizar el Derecho Penal para despojar de sus bienes y derechos a los que menos tienen y permitirle entonces a los ricos de siempre, que cada vez tengan más, con la impunidad cómplice y propia de sistemas penales permeados por la corrupción.

No tenemos tiempo ni derecho suficiente para continuar permitiendo las brechas entre lo que dicen las leyes y las realidades de nuestros pueblos.

Es cierto que tenemos que seguir luchando y perfeccionando el enfrentamiento a la delincuencia y a los delincuentes de cuello blanco, por cierto, muchos de los cuales, en algunos países, no conocen el rigor de una investigación criminal o de nuestras prisiones, sin embargo estas permanecen repletas de presos en espera de juicios o de sus condenas durante varios años.

Cómo explicarles a algunos pueblos que tengamos en cárceles a niños, adolescentes y jóvenes en vez de tenerlos en las escuelas construyendo el futuro de cada uno de nuestros países.

Cómo explicarles igualmente que algunos responsabilizados de cuidar y velar por lo que les pertenece, son los mismos que no cumplen eficazmente con su obligación, o que aprovechándose de sus funciones, le arrancan el derecho a ello y el sistema penal continúa impávido.

Cuba no está ajena al fenómeno del delito y a sus consecuencias, no es una sociedad perfecta pero les podemos asegurar, que sí existe un sistema social en condiciones de prevenirlo y enfrentarlo eficazmente, donde la cultura y la educación general son sus pilares fundamentales y se les enseña a sus hombres y mujeres el valor de la vergüenza, la dignidad, el decoro y los principios, y a sus dirigentes la austeridad, el sacrificio y el respeto al pueblo. Estas fortalezas son las que nos han permitido preservar y desarrollar la obra de la Revolución a pesar de las presiones y agresiones externas, donde resulta protagónico una de las violaciones más flagrantes del derecho Internacional, condenado casi unánimemente por la comunidad de países durante decenas de años, como es el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos.

Los fenómenos sociales que hoy enfrentan las Ciencias Penales requieren mayor preparación, organización, intercambio, cooperación ágil, efectiva, y unidad de los ministerios públicos y demás órganos

encargados de su prevención y enfrentamiento, y nuevas maneras más racionales, coherentes, expeditas y severas para poder exigir lo que corresponda a sus responsables a nivel nacional e internacional.

El enfrentamiento al delito no es patrimonio de ningún Estado en particular, es una obligación de todos, lo que obliga a perfeccionar los mecanismos de integración en materia de colaboración jurídica internacional, para alcanzar mayor efectividad en la lucha contra delitos transnacionales, tales como: el terrorismo, en cualquiera de sus modalidades, el tráfico y trata de personas, el lavado de activos, el tráfico de drogas, el tráfico de armas y de órganos, la ciberdelincuencia y los delitos medioambientales, entre otros que afectan la humanidad sin exclusión.

No menos importantes son aquellos retos asociados a los sistemas procesales, tales como las nuevas formas de solución de conflictos en sede penal, la justicia penal de menores, la ampliación de las facultades de los Ministerios Públicos para perseguir delitos cometidos en entidades jurídicas privadas, la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, el enjuiciamiento en ausencia, el acceso a la justicia y que esta sea pronta, de calidad y garantista, que se traduce en mejor y mayor defensa de nuestros estados y sociedades; una nueva formulación del papel de la víctima en el proceso, los costos y costas del proceso penal y la realización de los juicios orales, incluyendo la utilización de la tecnología informática.

Como podrán apreciar, en lo adelante nada será más fácil, pero son muchos los motivos y los argumentos para continuar, y trabajar porque un mundo mejor es posible y necesario.

Agradecemos nuevamente la presencia y participación en el evento a nuestros amigos y colegas, capaces de hacer un alto en sus complejas y difíciles tareas para intercambiar experiencias e información que a todos nos sirve. Ratificamos nuestro compromiso con los ministerios públicos, con los que estamos dispuestos a cooperar en el ámbito de nuestras funciones y hacemos patente nuestra solidaridad y lealtad con las causas comunes de los pueblos de nuestra América que soñaron y procuraron Bolívar, San Martín, Sucre, Martí y otros próceres.

Los invitamos a compartir lo mejor que tenemos los cubanos, que es su hospitalidad, solidaridad y lealtad, a la vez que condiciones y bellezas naturales que nos privilegian.

**MUCHAS GRACIAS.**



# FISCALÍA GENERAL RECONOCE A JUAN ESCALONA REGUERA

En la jornada de apertura del XIII Encuentro Internacional Ciencias Penales 2016 y el Primer Evento Legalidad, Derecho y Sociedad, su Comité Organizador reconoció al Dr. Juan Escalona Reguera, por el aporte realizado como fundador de eventos internacionales de la Fiscalía General de la República, predecesores de este cónclave científico.

Escalona es un jurista de extraordinaria trayectoria revolucionaria y política, que asumió diversas responsabilidades luego del triunfo de la Revolución, entre ellas la de Fiscal General.

Durante la etapa insurreccional fue capitán Auditor del Ejército Rebelde en la Sierra Maestra. Al fundarse los tribunales, con el Triunfo de la Revolución, es designado jefe del tribunal de Oriente Sur.

Cuando se creó el Ejército Occidental fue nombrado jefe del Estado Mayor, cargo que desempeña hasta abril de 1962.

Posteriormente, ocupó diferentes responsabilidades como Ayudante del Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. En 1981 fue designado Sustituto del Ministro de las FAR para la Defensa Civil. Fue parte del grupo que confeccionó la ley que creó el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR).



Desde octubre de 1983 ocupó el cargo de Ministro de Justicia, dirigiendo el grupo de trabajo, que en 1987, elaboró las modificaciones del Código Penal.

También se desempeñó como Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular desde 1990 hasta 1993. En ese año fue designado Fiscal General de la República, responsabilidad que ocupó hasta el 2014.

Fue miembro del Comité Central del Partido y Diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ostenta el grado

de General de Brigada, retirado. En el 2007 se le otorgó el título de Doctor Honoris Causa en Ciencias Jurídicas de la Universidad de La Habana y en el 2015 el de la Universidad de Oriente, casa de altos estudios de la que fue fundador.

Estos méritos e impecable trayectoria revolucionaria y en el campo jurídico, hicieron merecedores a Escalona Reguera del homenaje realizado por la Fiscalía General de la República en el Encuentro Internacional Ciencias Penales 2016.

# RESUMEN DE INTERVENCIONES ESPECIALES

23 DE MARZO DE 2016

**E**l Dr. Darío Delgado Cura, Fiscal General de la República, inauguró en la mañana del 23 de marzo de 2016 el XIII Encuentro Internacional Ciencias Penales 2016 y el Primer Evento Legalidad, Derecho y Sociedad.

Posteriormente intervinieron: la Dra. Luisa Ortega Díaz, Fiscal General del Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela; la Dra. Joana Marques Vidal, Fiscal General de la República Portuguesa; el Dr. Galo Chiriboga Zambrano, Fiscal General del Estado de Ecuador; y el Dr. Eduardo López Betancourt, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En la sesión de la tarde intervinieron el Sr. Iogan Davidovich Merkel, Vicefiscal General de la República de Kazajstán; el Dr. Juan M<sup>a</sup> Terradillos Basoco, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz en España; y el Dr. Leonardo Pérez Gallardo, Presidente de la Sociedad Iberoamericana de Derecho Notarial.

## **Dra. Luisa Ortega Díaz**

Fiscal General del Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela: llama a buscar solución a la crisis migratoria



Durante su intervención especial, la máxima representante de la fiscalía venezolana se refirió al fenómeno de la inmigración, desde la perspectiva psicológica, debido a los traumas, penurias, conmociones y las violaciones de los derechos humanos que son víctimas los refugiados, al ser desplazados de sus lugares de orígenes. Este es un tema de gran vigencia en el contexto actual, debido a la agudización de la crisis humanitaria y el aumento del número de refugiados a escala global, especialmente a partir de las altas tasas de desplazamiento de personas del Medio Oriente y África hacia Europa. Señaló que esta es una crisis de refugiados y no una ola migratoria.

De igual forma, se refirió a los inmigrantes forzados, cuyos propósitos son ser refugiados, producto de conflictos armados, raciales o catástrofes naturales en sus países de orígenes. Llamó a la reflexión en torno a las causas que originan estas crisis y en aras de buscar soluciones para garantizar la protección de los derechos de refugiados e inmigrantes, conceptos entre los cuales manifestó que no existen diferencias. La Fiscal General también describió la situación migratoria en Venezuela, al respecto, manifestó que en esta nación se garantizan los derechos de todas las personas que ingresan al territorio.

**Dra. Joana Marques Vidal**

Fiscal General de la República Portuguesa: Un modelo único de Ministerio Público es una necesidad



Fiscal General de Portugal se refirió a las competencias orientadas al principio de legalidad en el Ministerio Público Portugués, en su intervención especial durante el XIII Encuentro Internacional Ciencias Penales. Manifestó que no existe un modelo único de Ministerio Público, y que esta es probablemente una necesidad o exigencia para que dicha institución pueda imponerse en los respectivos sistemas de justicias como el garante de la legalidad, de la defensa de los derechos de los ciudadanos y de la comunidad, así como de la defensa de los intereses colectivos del Estado como garantizador de la administración equitativa, imparcial y eficaz de la

justicia. Manifestó que el denominador común de los diversos modelos de los Ministerios Públicos debe ser su acción en nombre del interés público, de los derechos fundamentales de la legalidad y la justicia, pero para ello deben estar dotados de características internas y externas que garanticen su autonomía y la gerencia de los otros poderes del Estado. Joana Marques Vidal explicó la organización, competencias y funcionamiento del ministerio público del cual es su máxima representante, para garantizar el ejercicio de sus funciones.

**Dr. Galo Chiriboga Zambrano**

Fiscal General del Estado de Ecuador: pertinencia de la responsabilidad penal de la persona jurídica



El Fiscal General de Ecuador presentó la inclusión de un tipo penal en la legislación ecuatoriana, que hace referencia a la responsabilidad penal de la persona jurídica en dicha nación. Señaló que la pertinencia de este tema viene discutiéndose hace varios años en Ecuador. Se refirió a lo que la legislación ecuatoriana ha incorporado como responsabilidad de la persona jurídica en el código integral penal, así como la diferencia con las personas naturales. Chiriboga Zambrano manifestó que la persona jurídica es un instrumento por el cual directivos y operadores del derecho utilizan esa infraestructura jurídica para cometer uno de los delitos que se tipifican en la Ley.

**Dr. Eduardo López Betancourt**

Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México: La crisis del derecho en el siglo XXI



“Cuba está cumpliendo un papel fundamental en el Derecho penal internacional”, señaló el catedrático de Derecho Penal, durante su intervención en Ciencias Penales 2016. Se refirió a la crisis del derecho en el siglo XXI, el cual señaló como un fracaso a nivel global, a partir del aumento de la delincuencia, los delitos de cuello blanco, la droga y otros, que afectan esencialmente a los pueblos. Manifestó que Cuba nos tiene que mostrar un ejemplo distinto, y ya lo hizo recientemente, y cuánto hemos aplaudido que la paz de Colombia se haya forjado aquí. El reconocido intelectual mexicano destacó que este evento es un refugio donde se discuten temas fundamentales, sobre



renglones que causan expectación mundial, pero que un día se tendrán que volver a analizar. Aprovechó el espacio para “desear que este inicio de relaciones con el país poderoso (Estados Unidos) sean para bien, siempre hay que tener esperanza, siempre hay que tener una actitud constructiva y positiva, pero me tranquilizaron las palabras de Darío (Fiscal General de la República de Cuba): “Cuba seguirá siendo socialista” y eso es lo que nos alimenta a quienes crecimos con la esperanza de un mundo distinto.”

### **Susan Lustig**

Directora administrativa de la Alianza Estatal de los Procuradores Generales de Justicia de los Estados Occidentales de Estados Unidos



La abogada norteamericana señaló en su intervención durante el encuentro internacional: “Mis procuradores tienen un gran interés en conocer a sus homólogos en otros países y establecer vínculos y relaciones para el intercambio de ideas, apoyo mutuo y compartir experiencias, todo al servicio de la justicia, que existe sin fronteras, es universal.”

Además, manifestó que: “Es para mí personalmente un gran honor dirigirme a ustedes y es un placer estar aquí en Cuba. Aparte de ser un honor es una sorpresa, es algo que hace un año no podíamos haber previsto, que estaríamos aquí compartiendo estos momentos.”

Esta edición de Ciencias Penales 2016 es la primera vez, en la historia de estos encuentros, en el que asisten representantes de los Estados Unidos.

### **Sr. Iogan Davidovich Merkel**

Vicéfiscal General de la República de Kazajstán



El representante de la Fiscalía Kazaja durante su intervención especial se refirió a la actividad de los órganos de la Fiscalía de la República de Kazajstán en la esfera del Derecho Internacional, un aspecto de vital importancia en este evento.

### **Dr. Juan M<sup>a</sup> Terradillos Basoco**

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz en España



El Director del Departamento de Derecho Internacional Público, Penal y Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz en España, durante Ciencias Penales 2016, disertó sobre la respuesta penal a la delincuencia económica. El también Miembro de Honor de la Sociedad Cubana de Ciencias Penales reflexionó acerca del modelo penal cubano.

**Dr. Leonardo Pérez Gallardo**

Presidente de la Sociedad Iberoamericana de Derecho Notarial



El también Profesor Titular de Derecho Civil y Notarial de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana se refirió a la incapacidad, discapacidad e intervención de la Fiscalía en su accionar durante su intervención en Ciencias Penales 2016.

## 24 DE MARZO DE 2016

**D**urante la segunda jornada del XIII Encuentro Internacional Ciencias Penales 2016 y el Primer Evento Legalidad, Derecho y Sociedad, intervinieron el Sr. Nguyen Hoa Binh, Fiscal General de la Fiscalía Popular Suprema de Vietnam; la Dra. Alejandra Magdalena Gils Carbó, Procuradora General de la Nación de la República de Argentina; Ana Julia Guido Ochoa, Fiscal General de la República de Nicaragua; Dr. Joao María Moreira de Sousa, Procurador General de la República de Angola; Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, Fiscal Supremo de la República del Perú; Alexander Bastrykin, General de Ejército y Presidente del Comité Estatal de Investigación de la Federación de Rusia; Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre, Fiscal Superior Jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación de Perú.

Mientras, en la sesión de la tarde intervinieron Klishas Andrey Aleksandrovich, Presidente del Comité de Consejo Federal sobre la Legislación Constitucional y el Edificio del Estado Federal de la Federación de Rusia; María Alcalé Sánchez, Catedrática de Derecho Penal y Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz, España; y Joaquín Infante Ugarte, Asesor del Presidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba.

**Sr. Nguyen Hoa Binh**

Fiscal General de la Fiscalía Popular Suprema de Vietnam



El Fiscal General durante su intervención se refirió al Código Penal aprobado recientemente en esa nación, el cual cuenta con 9 leyes que contribuyen al respeto y protección de los derechos humanos y ciudadanos, objetivos que están entre los principales resultados de la actividad legislativa expresada en la nueva Ley.

Además, aludió a la captura, retención y detención ilegal de las personas, y cómo estos procedimientos violan los derechos de las mismas. Manifestó que se tiene que evitar el abuso de medi-

das de retención y que prevalezcan las medidas de recopilación de pruebas objetivas, las que resultan beneficiosas para las personas. Al respecto, señaló que “no se puede detener a nadie sino existe base legal en la ley”. De igual forma, señaló el papel que desempeñan la Fiscalía y el Tribunal en el proceso de retención y detención de las personas, para velar porque se realice correctamente, y se garanticen todos los derechos al respecto.

### **Dra. Alejandra Magdalena Gils Carbó**

Procuradora General de la Nación de la República de Argentina: Enfrentamiento a los Delitos Económicos, una prioridad



“En general, en los sistemas penales se observa un déficit en la persecución de los crímenes económicos”, así manifestó la Procuradora General de Argentina, al referirse al crimen económico transnacional, durante las sesiones de Ciencias Penales 2016. Refirió que hay mayores dificultades en detectar los delitos económicos que los delitos comunes, “los crímenes económicos son tan complejos que solo pueden ser detectados por expertos”.

Debido a esta situación, realizó un llamado a que los Ministerios Públicos asuman un rol proactivo, para hacer más eficaz su detención, “y para suplir esta deficiencia de impulso de las particulares y una capacitación permanente, con constante diálogo con las autoridades de control”.

### **Ana Julia Guido Ochoa**

Fiscal General de la República de Nicaragua: Migración y tráfico de personas



La Fiscal General de Nicaragua se refirió al fenómeno de la migración y el tráfico de personas a nivel mundial y en particular en su país, como parte de su intervención especial en Ciencias Penales 2016. Manifestó que el “tráfico de migrantes es un delito complejo, que puede involucrar varias etapas, países y actores, y se encuentra en constante cambio, que adopta mayores y distintas formas en todas las partes del mundo”.

Por ello, también dirigió su intervención al debate sobre el crimen organizado, el narcotráfico y la trata de personas, siendo estas algunas de las temáticas fundamentales del encuentro internacional y fenómenos con incidencia a nivel mundial.

### **Dr. Joao Maria Moreira de Sousa**

Procurador General de la República de Angola



Al Papel del Ministerio Público angolano en la legitimidad para ordenar y legalizar detenciones y prisiones, en base a su legislación, se refirió el Procurador General de Angola en su intervención durante Ciencias Penales 2016.

También debatió acerca de la importancia del papel, estructura y funciones del Ministerio Público. Manifestó que en el combate a la criminalidad transnacional, las soluciones deben ser encontradas teniendo en cuenta la realidad concreta de cada país.



**Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos**

Fiscal Supremo de la República del Perú



El Fiscal Supremo de la República del Perú, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, durante su intervención en el encuentro internacional explicó el rol que debe desempeñar el Ministerio Público en el enfrentamiento al fenómeno de la corrupción. También se refirió a la manifestación del crimen organizado. Estos son temas a los que se les presta especial importancia en el contexto actual, además de ser algunos de los tópicos principales de este evento.

**Alexander Bastrykin**

General de Ejército y Presidente del Comité Estatal de Investigación de la Federación de Rusia



Durante su intervención en el cónclave científico Alexander Bastrykin se refirió al trabajo del Comité Estatal de Investigación de Rusia en la lucha contra la corrupción. Este Comité se creó en el 2010, mediante decreto del Presidente de la Federación Rusa, y en poco tiempo ha desempeñado un papel muy valioso en el combate contra el delito. Además, manifestó que el país ha emprendido una amplia campaña sobre la importancia del enfrentamiento a la corrupción.

Señaló que son procesados por delitos económicos, tanto personas naturales como jurídicas. De igual forma, reafirmó la importancia de la asistencia y cooperación jurídica a nivel internacional para garantizar el enfrentamiento a estos delitos.

**Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre**

Fiscal Superior Jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación de Perú



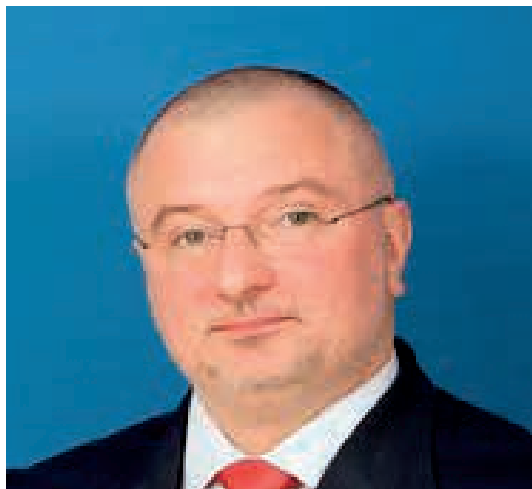
El Fiscal de Perú en su intervención realizó un análisis sobre la ciberdelincuencia, refiriéndose a la trascendencia internacional del delito informático, a partir de la creación de las Redes Sociales, las que permiten a los usuarios compartir voluntariamente los datos, lo que relativiza la intimidad de las personas, sin embargo, señaló que ello no justifica que terceros accedan a esta información de forma indebida, burlando ciertos mecanismos de seguridad, lo que hace de estas conductas merecedoras y necesitadas de pena, merced a su innegable relevancia jurídico-penal.

Además, se refirió a la carencia de controles estrictos y rígidos a ciertas páginas virtuales de carácter pornográfico o de alto contenido de violencia, que son una grave amenaza para las personas más vulnerables, los niños y los adolescentes, que pueden ser presas fáciles de redes de pedófilos. Señaló que esta situación criminológica es objeto de regulaciones jurídico-penales, a través de los tipos penales de Pornografía infantil, Turismo Sexual infantil y otros. Al respecto, manifestó “siempre

hemos sido firmes en considerar que la verdadera prevención delictiva empieza por casa, en la medida que, por lo general, el Derecho penal llega cuando la afectación ya tomo lugar.” De igual forma, se refirió a los Delitos Intelectuales y a la política criminal desde la cooperación judicial internacional.

### **Klishas Andrey Aleksandrovich**

Presidente del Comité de Consejo Federal sobre la Legislación Constitucional y el Edificio del Estado Federal de la Federación de Rusia



El también Doctor en Leyes, Profesor y Jurista Honorable de la Federación de Rusia se refirió a cómo contrarrestar la manipulación del mercado y mal uso de la información por sus miembros, durante su intervención en Ciencias Penales 2016.

### **Dra. María Alcaide Sánchez**

Catedrática de Derecho Penal y Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz, España



La catedrática española durante su intervención en el encuentro internacional se refirió al papel que desempeña el Derecho Penal frente a la corrupción pública y la corrupción privada, así como al desafío que tiene Cuba frente a la apertura de sus relaciones internacionales.

### **Dr. Joaquín Infante Ugarte**

Asesor del Presidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba



Durante su intervención en Ciencias Penales 2016, el también Premio Nacional de Economía en Cuba se refirió al contexto económico y social cubano, y al enfrentamiento a la corrupción y al delito, especialmente al económico, prioridades en el país.

Al respecto, señaló que en esta lucha se debe tener en cuenta la significación de la ética y valores morales, la necesidad de preservar la disciplina social, pero también al control interno, la contabilidad y los costos, la auditoría y las finanzas.

**E**n la última jornada del XIII Encuentro Internacional Ciencias Penales 2016 y el Primer Evento Legalidad, Derecho y Sociedad, intervinieron el Sr. Jiang Jianchu. Vicefiscal General de la Fiscalía Popular Suprema de China, el Sr. Yury Aleksandrovich Guliaguin, Viceprocurador General de la Federación de Rusia; la Sra. Lúcia Maximiano do Amaral, Procuradora General Adjunta y Coordinadora del Departamento Especializado para el Área de Control a la Legalidad de Mozambique; el Dr. Juan Carlos Carbonell Mateu, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia y Director del Instituto de Criminología, Universidad de Valencia, España; la Dra. Rosa Ana Morán Martínez, Fiscal de Sala de la Fiscalía General de Estado y Jefa de la Unidad de Cooperación Internacional, España; el Dr. Luis Arroyo Zapatero, Catedrático español de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca; la Esp. Alina Montesino LÍ, Fiscal Jefa de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República de Cuba.

Mientras en la sesión vespertina intervinieron el Dr. Rodolfo Dávalos Fernández, Profesor Titular de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, Cuba; y la Dra. Mayda Goite Pierre, Profesora Titular de Derecho Penal y Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana de Cuba.

### **Sr. Jiang Jianchu**

Vicefiscal General de la Fiscalía Popular Suprema de China



El Vicefiscal de China en su intervención en Ciencias Penales 2016 se refirió al cumplimiento de las funciones fiscales en la lucha contra los daños a los recursos ambientales, de acuerdo con la Ley.

Manifestó que la protección del Medio ambiente, el enfrentamiento al cambio climático y la protección a la seguridad de los recursos energéticos son delitos comunes que tiene ante sí el mundo entero, por lo que construir la cultura de la conservación del medio ambiente concierne al bienestar del pueblo y el futuro del mundo.

Señaló que los órganos de la procuraduría han obtenido resultados excepcionales en la lucha contra los delitos de atentado a los recursos medioambientales, de conforme a la ley. Al respecto, resaltó que en su país se ha reforzado la dinámica y los procesos de detención y procesamiento en estos delitos, fortaleciendo la protección judicial de los recursos medioambientales, a través de la promoción de la cultura de conservación y otros controles que supervisan estos procesos.



**Sr. Yury Aleksandrovich Guliaguin**

Viceprocurador General de la Federación de Rusia



El Viceprocurador General de Rusia durante su intervención en Ciencias Penales 2016 señaló que su país se ha insertado a la lucha contra el terrorismo, y que se ha desarrollado y funciona un sistema orientado a combatir este fenómeno extremadamente peligroso.

Señaló que en la legislación rusa han sido consagrados los principios fundamentales del enfrentamiento al terrorismo, que constituyen ante todo la garantía de la protección de los derechos humanos, las libertades fundamentales de los ciudadanos y la legalidad, en este contexto la lucha se realiza sobre

la base de la constitución de conformidad con las leyes federales y los convenios internacionales suscritos por Rusia. También se refirió al financiamiento al terrorismo y las medidas adoptadas al respecto.

**Sra. Lúcia Maximiano do Amaral**

Procuradora General Adjunta y Coordinadora del Departamento Especializado para el Área de Control a la Legalidad de Mozambique



La procuradora se refirió a delitos transnacionales como el tráfico ilegal de órganos, de personas, con especial énfasis en los menores de edad, y de la explotación sexual de estos, durante su intervención en Ciencias Penales 2016. Además, aludió a la situación internacional en relación a estos delitos y al contexto nacional y de África.

Señaló que estos fenómenos se han agravado en su país, porque el ordenamiento mozambicano actual no tiene instrumentos propios para castigar a los autores de estos crímenes, y que además ejerza un efecto disuasivo para poder frenar

esta situación.

Especial mención tuvieron los menores de edad como víctimas de estos delitos, a partir de que indicó que estudios recientes indican que las mujeres y niños son los más afectados. Además señaló que la cooperación internacional se ha mostrado cada vez más necesaria e importante en la lucha contra el tráfico de personas, sobre todo cuando una parte significativa de los casos son transnacionales, por lo tanto concierne su solución a varios países.

**Dr. Juan Carlos Carbonell Mateu**

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, España



Durante su intervención en este cónclave científico el también Director del Instituto de Criminología de la Universidad de Valencia se refirió a las garantías democráticas en tiempo de cambio: Legalidad y culpabilidad.

**Dra. Rosa Ana Morán Martínez**

Fiscal de Sala de la Fiscalía General de Estado y Jefa de la Unidad de Cooperación Internacional, España



Al enfrentamiento a la corrupción, tema medular en el contexto internacional actual, se refirió Morán Martínez, en su intervención en Ciencias Penales 2016.

Manifestó que la cooperación internacional es la clave en el enfrentamiento a este fenómeno, y que los avances alcanzados en dicho terreno favorecen esta lucha.

**Dr. Luis Arroyo Zapatero**

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, España



Entre la codicia, la violencia y la crueldad fue la ponencia presentada por el catedrático español en Ciencias Penales 2016, donde estos tres elementos se refieren a las emergencias en la política criminal internacional.

Manifestó que el crimen es antiguo, pero las formas del crimen no lo son tanto, señalando que existen fenómenos modernos en su expresión. La codicia se relaciona con la economía, la violencia señaló que se va reduciendo en la historia de la humanidad, aunque aún existen tasas de homicidios y violencia criminal muy alta, las que se deben combatir. Por lo tanto, durante su intervención se refirió a los múltiples retos que tiene el derecho penal europeo e internacional en el contexto actual.

**Esp. Alina Montesino Lí**

Fiscal Jefa de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República de Cuba



La especialista de la Fiscalía General se refirió a la política penal cubana y su aplicación en aras de garantizar el enfrentamiento al delito, prioridades en esta nación.

**Dr. Rodolfo Dávalos Fernández**

Profesor Titular de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, Cuba



A las nuevas relaciones entre Cuba y EEUU, y el reto que representan en el orden jurídico, se refirió el Profesor en su intervención en el encuentro Ciencias Penales.

En el contexto actual el restablecimiento de las relaciones internacionales entre estas dos naciones y el acercamiento en diversos sectores impone un cambio en las ciencias jurídicas.

**Dra. Mayda Goite Pierre**

Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana de Cuba (Actual Vicerectora)



La profesora titular de Derecho Penal de esta casa de estudios, durante su intervención especial en el Encuentro Ciencias Penales 2016, presentó la ponencia “De reformas y contrarreformas: De los sustantivo y lo procesal. ¿Dónde nos encontramos?”.





# PROGRAMA CIENTÍFICO

21

NO. 4 - 2016

LEGALIDAD, DERECHO Y SOCIEDAD

MEMORIAS DEL XIII ENCUENTRO INTERNACIONAL CIENCIAS PENALES 2016

Como parte del Programa Científico del XIII Encuentro Internacional Ciencias Penales 2016 y el Primer Evento Legalidad, Derecho y Sociedad se realizaron 6 paneles y una mesa redonda, y se presentaron 14 ponencias, donde se debatieron temáticas de gran actualidad y de medular importancia para el contexto nacional e internacional en el campo de las ciencias penales.

Fiscales, profesores, jueces, estudiantes, catedráticos y juristas de diversos países discutieron acerca de la garantía probatoria en el proceso penal, la trata de personas, el enfrentamiento a la corrupción administrativa, el tráfico ilegal de migrantes, la globalización, el lavado de dinero y la criminalidad organizada, temáticas de gran vigencia e incidencia en nuestros días.

De igual forma, los presentes intercambiaron respecto a la protección de los adultos mayores, la defensa de los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes, especial atención se le prestó a los menores víctimas. A continuación, se presentan las ponencias, paneles y mesa redonda realizados.

## 23 DE MARZO DE 2016

### PONENCIAS

- “La prohibición de la reformatio in peius en el juicio de reenvío. Un análisis desde la casación cubana”. Dra. Marilys Rafaela Fuentes Águila, Jueza del Tribunal Supremo Popular. Cuba.
- “Familia y privación de la libertad en Colombia”. Mónica Alexandra Mendoza Molina, Profesional de investigación social del Instituto Rosarista de Acción Social “Rafael Arenas Ángel” -SERES- Universidad del Rosario. Bogotá. Colombia.
- “El Fiscal en la detención, aprehensión y prisión preventiva del imputado-acusado en el procedimiento penal mexicano acusatorio y oral”. Dr. Elías Polanco Braga, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). México.
- “La reducción de la mayoría penal trae beneficios para la red de pedofilia: revés para el humanismo jurídico”. Dra. Monica Paraguassu Correia da Silva, Profesora de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal Fluminense y Profesora del Programa de Posgrado en Derecho Constitucional. Brasil
- “La criminalidad internacional del lavado de dinero y su regulación en la norma sustantiva cubana”. Lic. Isabel María Pérez Quintero, Fiscal Asistente de la Fiscalía Provincial de Sancti Spíritus. Cuba.

## PANEL: GARANTÍA PROBATORIA EN EL PROCESO PENAL CUBANO.

- “La solicitud de los peritajes especiales por parte del instructor penal en los delitos relacionados con droga”. Cptán. Niurka Castaño San Miguel. Instituto Superior del MININT “Eliseo Reyes Rodríguez”. Cuba.
- “La cadena de custodia de la prueba en el ordenamiento jurídico cubano y en el derecho comparado”. Lic. Ana Marilyn López Camacho, Fiscal Provincial de Villa Clara. Cuba.
- “La cadena de custodia y la prueba ilícita”. MsC. Emma Calderón Arias, Profesora Auxiliar de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Cuba.

## PANEL: EL TRÁFICO DE PERSONAS DESDE DIFERENTES ENFOQUES JURÍDICOS.

- “Trata de Personas y Tráfico Ilegal de Migrantes”. Dr. Sebastián Rafael Robles. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Santiago del Estero. Argentina.
- “El delito de Tráfico Ilícito de Personas en Cuba y la necesidad de su actualización en el Código Penal”. Yisel Rojas Cristo, Estudiante de 3er año de la carrera de Derecho. Universidad José Martí. Sancti Spíritus. Cuba.

## PANEL: DERECHOS Y GARANTÍAS DE LOS MENORES DE EDAD EN CUBA.



- “Características de las familias de niños, niñas y adolescentes comisores de hechos que la Ley tipifica como delitos”. MsC. TC. Madalegnis Casado Reyes, 1er. Investigadora del Centro de Investigaciones Científicas del Instituto Superior

del MININT “Eliseo Reyes Rodríguez”. Cuba.

- “Fundamentos científicos del modelo teórico metodológico para el enfrentamiento investigativo a los delitos en los que se encuentran niñas, niños y adolescentes víctimas”. MsC. Myor. Lissett Cuellar Favela, Jurista especialista del Centro de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la Dirección Nacional de Menores. MININT. Cuba.
- “La Protección integral a las niñas, niños y adolescentes, a la luz del Decreto Ley 64/82. Problemáticas y Retos”. Lic. Cnel. Mirta Quintas Montoro, Presidenta del Consejo Nacional de Atención a Menores y MsC. TC Daimara Ileana Aguilar Sevillano, Especialista de la Dirección Nacional de Menores. MININT. Cuba.
- “Protección de los derechos de los menores de edad internos en Escuela de Formación Integral”. MsC. Diana Rosa Simón Gutiérrez, Fiscal de la Dirección de Protección de los Derechos Ciudadanos de la Fiscalía General de la República de Cuba.

## PANEL: RETOS DE LA FISCALÍA CUBANA EN LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL DISCAPACITADO Y EL ADULTO MAYOR.

- “El papel del fiscal en la protección a las personas con discapacidad”. Lic. Yamarai Morera Aragón, Fiscal Jefe del Departamento de Cuadros de la Fiscalía Provincial de Artemisa. Cuba.
- “Protección de los derechos del ciudadano adulto mayor. Un reto para la Fiscalía General de la República de Cuba”. MsC. Asseneth Verdecia Rodríguez, Fiscal de la Dirección de Formación y Desarrollo de la Fiscalía General de la República de Cuba.
- “Eficacia de la representación legal del adulto mayor institucionalizado. ¿Ficción o realidad?” MsC. Milagros Rodríguez Estrada, Fiscal Provincial de Villa Clara y MsC. Sara Vargas Abreu, Fiscal de la Secretaría del Fiscal General de la República. Cuba.

## PANEL: ENFRENTAMIENTO A LA CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA EN CUBA.

- “La corrupción y su expresión en el comercio exterior. Aspectos teórico- prácticos para su enfrentamiento en Cuba”. MsC. Irina Tolón Murguía, Profesora Asistente e Investigadora

Agregada del Centro de Investigaciones Científicas del Instituto Superior del Ministerio de Interior “Eliseo Reyes Rodríguez”. Cuba.

- “De la corrupción administrativa a la delincuencia económica. Consecuencias de la actualización del modelo económico cubano en el Derecho Penal”.

MsC. Manuel Alberto Leyva Estupiñán, Profesor de la carrera de Derecho de la Universidad de Holguín. Cuba.

- “Los mecanismos para evadir el fisco”. MsC. Zenia Ferrer Mora, Fiscal Asistente de la Fiscalía General de la República de Cuba”.

## 24 DE MARZO DE 2016

### PONENCIAS

- “Infracciones a deberes y su impacto en el lavado de activos”. Mónica Palencia Núñez, Abogada. Ecuador.
- “La violencia intrafamiliar y de género, como factores criminógenos de orden exógeno, en el delito de femicidio según los lineamientos del derecho penal panameño.” Dra. Julia Elena Sáenz González, Catedrática de Derecho Penal y Directora del Observatorio Legislativo, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, de la Universidad de Panamá.
- “La conciliación como método alternativo de prevención y solución de delitos penales”. Lic. Adriana Mendoza Solórzano, Abogada. Ecuador.
- “Efectos de la responsabilidad tributaria en el ámbito penal tributario conforme a la normativa del Ecuador”. Corina Navarrete, Abogado. Ecuador.
- “Legitimidad de la corte penal internacional y los tribunales penales internacionales de carácter AD HOC”. Johnny Roca de Castro, Abogado. Ecuador.

### PANEL: UNA MIRADA A LOS PRINCIPIOS Y A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN ECUADOR.

- “La participación ciudadana en la Administración de Justicia Penal en el Ecuador”. Héctor Vanegas y Cortázar, Abogado. Ecuador.
- “Las normas del debido proceso constitucional en el Código Orgánico Integral Penal”. Eduardo Franco Loo, Abogado. Ecuador.
- “El Rol del Juez dentro de un Sistema de Administración de Justicia”. Ernesto Salcedo Ortega, Abogado. Ecuador.



- “Reflexiones sobre el derecho a la tutela judicial efectiva: su compleja configuración”. María Isabel Nuques Martínez, Abogada. Ecuador.
- “La jurisprudencia constitucional en la nueva estructura del sistema de fuentes del ordenamiento jurídico ecuatoriano y el rol de los jueces ordinarios”. Xavier Rodas Garcés, Abogado. Ecuador.

### PANEL: LA NECESIDAD DE UN DERECHO PENAL DE ÚLTIMA RATIO, EN LA ENCRUCIJADA ENTRE LAS GARANTÍAS PENALES Y EL EXPANSIONISMO ACELERADO. REALIDADES Y ALTERNATIVAS.

- Dra. Arlin Pérez Duharte, Profesora Titular de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana y Secretaria de la Sociedad cubana de Ciencias Penales. Cuba.
- Dr. Rodolfo Fernández Romo, Profesor Titular y Jefe Departamento de la Disciplina Penal y Ciencias Criminológicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Cuba.



- Dra. Marta Fernández Martínez, Profesora Titular y Vicedecana de Relaciones Internacionales y Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Cuba.
- Dra. Iracema Gálvez Puebla, Profesora Auxiliar de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Cuba.
- Lic. María Carla de la Guardia Oriol, Profesora Instructora de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Cuba.
- Nexy Camila Sánchez Silveira, Estudiante de cuarto año de la carrera de Derecho de la Universidad de La Habana. Cuba.
- Yusmielys García Clark, Estudiante de cuarto año de la carrera de Derecho de la Universidad de La Habana. Cuba.
- Nathali Miret González. Estudiante de cuarto año de la carrera de Derecho de la Universidad de La Habana. Cuba.
- Elianey Alpizar Ramos. Estudiante de quinto año de la carrera de Derecho de la Universidad de La Habana. Cuba.

#### **PANEL: VIOLENCIA DE GÉNERO: MIRADAS Y RETOS EN LA SOCIEDAD CUBANA ACTUAL.**



- Dra. Ada C. Alfonso Rodríguez, Coordinadora del Subgrupo de Docencia e Investigación del Programa de Salud y Educación Sexual. CENESEX. Cuba.
- Dra. Clotilde Proveyer Cervantes, Profesora Titular de la Facultad de Sociología de la Universidad de La Habana. Cuba.
- MsC. Mareelén Díaz Tenorio, Investigadora de la Organización "Oscar Arnulfo Romero". Cuba.

#### **MESA REDONDA: ANÁLISIS JURÍDICO SOBRE LA LEY 82 DE 24 DE OCTUBRE DE 2013, QUE ADOPTA MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA EN LAS MUJERES Y REFORMA AL CÓDIGO PENAL PARA TIPIFICAR EL FEMICIDIO Y SANCIONAR LOS HECHOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.**

- Dra. Julia Elena Sáenz González, Catedrática de Derecho Penal y Directora del Observatorio Legislativo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, de la Universidad de Panamá.
- Estudiantes Comisionados del Observatorio Legislativo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá:  
Tayleen N. Pérez S., Yabelis Y. Nagar P., Nekelda Moreno V., Azucena Pitterson., Ricardo E. Murillo U.

#### **PANEL: CONSTITUCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA.**

- "Democracia y Derechos Humanos". Teresa Nuques Martínez, Abogada. Ecuador.
- "El control de la legalidad como garantía de la seguridad jurídica de la ciudadanía". Ricardo Alberto Videla, Abogado Especialista en Derecho Público y Prosecretario Letrado del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba. Argentina.
- "La seguridad ciudadana en relación con los deberes y derechos ciudadanos reconocidos por la Constitución de la República del Ecuador". Dra. Silvia Zambrano Noles, Máster en Derecho Constitucional. Docente Titular de la Universidad Metropolitana del Ecuador y Jueza de la Corte Provincial de Justicia de El Oro y Dra. Lianet Goyas Céspedes, Profesora Titular Universidad Metropolitana. Ecuador.



# PONENCIAS PRESENTADAS

EN EL XIII ENCUENTRO  
INTERNACIONAL CIENCIAS PENALES  
2016 Y PRIMER EVENTO LEGALIDAD,  
DERECHO Y SOCIEDAD

**L**as ponencias de los delegados de Cuba fueron publicadas en la edición especial de la Revista “Legalidad, Derecho y Sociedad”, previa al XIII Encuentro Internacional Ciencias Penales 2016 y el Primer Evento Legalidad, Derecho y Sociedad, por lo que a continuación se publican las ponencias presentadas por delegados extranjeros.

## *Responsabilidad penal de las personas jurídicas en El Ecuador.*



**Dr. Galo Alfredo Chiriboga Zambrano**  
Fiscal General del Estado  
Ecuador

### INTRODUCCIÓN

**E**l presente artículo analiza la responsabilidad penal de las personas jurídicas, un tema controvertido y debatido desde años atrás por la doctrina y que resulta de interés académico particular, pues su investigación y estudio viene dado desde los primeros años de mi incursión en el derecho, cuando en los años 80's defendí

mi tesis doctoral titulada “*De la responsabilidad de la persona jurídica, de sus gerentes, directores y administradores*”, y que a pesar de ser una institución no incluida en la legislación penal ecuatoriana de la época, proponía para entonces, un aporte al debate nacional y la necesidad de su incorporación legislativa; dada principalmente

por la enorme influencia de la “empresa” en el orden económico, político y social.

Mi tesis defendía la propuesta de incorporar legislativamente la responsabilidad de las personas jurídicas como una forma de combatir la delincuencia organizada. Hoy en día, después de varias décadas, con la promulgación del Código Orgánico Integral Penal, somos testigos de la renovación de instituciones tradicionales y la creación de nuevas instituciones en el derecho positivo ecuatoriano.

En ésta línea, asistimos a la evolución del derecho penal que bajo ninguna circunstancia debe abandonar los principios garantizadores; fundamentales para el desarrollo del derecho penal liberal.

Ahora bien, la concepción de que sólo las personas naturales podrían ser imputables ha cambiado ese modelo tradicional que se ha hecho referencia, pues no se puede soslayar la presencia de las personas jurídicas en diversas actividades vitales de los ciudadanos, así: *“Los entes ideales gestionan la entrega de servicios esenciales, de ellos recibimos notificaciones de pago, envían mails, brindan servicios financieros, pero también pueden dañar el medio ambiente, realizar actos de contrabando, fabricar y distribuir alimentos y medicamentos en mal estado y por ello dañinos para la salud, blanquear capitales, realizar grandes defraudaciones financieras a los ahorristas, producir impactantes maniobras de evasión tributaria, etc.”* (Rusconi, 2009: 679)

Y en este sentido, sucede que las personas jurídicas pueden realizar actividades como éstas e incluso con mayor trascendencia y lesividad que cuando se comete por las personas naturales en forma individual, pues lo hacen *“...con una enorme capacidad para multiplicar los efectos de sus actos e impactar en grandes concentraciones de personas y todo ello pueden realizarlo con cierta presunción de legitimidad que brinda la actuación institucional.”* (Rusconi, 2009: 680)

Las personas jurídicas como empresas y corporaciones o fundaciones; mantienen una estructura organizada lo que significaría cumplir con el carácter organizado de la delincuencia, el cual alude a la comisión de uno o varios delitos a través de grupos de personas que funcionan en espacios integrados y estructuras organizacionales, es decir la participación de varias personas que no han perdido el tiempo en sacar partido de la economía global y tecnología sofisticada, cuya circunstancia precisamente es la diversidad de formas de violencia, recursos tecnoló-

gicos de punta, actuación transnacional, gran poder financiero y alto grado de peligrosidad en la comisión conjunta de estas infracciones.

En este contexto, la responsabilidad de las personas jurídicas se presenta en la serie de tipos penales que se conocen como delincuencia organizada; la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada – Convención de Palermo- ha facilitado hacer frente al flagelo de la delincuencia organizada como problema mundial y trata de hacer una definición de sus términos más sensibles, por ejemplo, establece que: *“grupo delictivo organizado”* se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados... con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material; (Convención de Palermo)

Y en éste sentido, el derecho penal debe ocuparse de la participación de las personas jurídicas y de sus representantes legales que actúan en el marco de sus procesos organizacionales.

Ya Silvina Bacigalupo, ha afirmado que: *“...el sujeto del derecho penal clásico, no se adecua y resulta insuficiente para responder, desde el derecho penal, a la comisión (omisión) de injustos penales en la sociedad moderna. Los ejemplos más frecuentes para esta afirmación se encuentran en numerosas conductas ilícitas realizadas dentro del derecho penal económico, de los delitos ecológicos o de los fraudes de subvenciones en el marco del derecho comunitario, realizados a partir de una organización empresarial, es decir, por una persona jurídica. La distribución de competencias dentro de una organización compleja, como tiene una persona jurídica, impide en la mayoría de los casos imputar el injusto a un sujeto concreto...”* (Bacigalupo, 1998:141) para lo cual se hace necesario un modelo de imputación para las personas jurídicas.

A continuación trataré de profundizar ciertos subtemas que considero necesarios para plantear un panorama amplio sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Ecuador.

## EL DEBATE SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DURANTE LOS AÑOS 80'S:

Como antecedente reciente a la década de los

80's, a partir de 1972, año en que empieza la gran explotación petrolera, el proceso de industrialización se intensifica en nuestro país, lo cual permitió generar ahorro interno e inversión y por ende un crecimiento de la economía, posteriormente con el aumento de los precios del barril de petróleo la economía se refuerza; lo cual genera grandes cambios en la estructura económica y política.

Los ingresos petroleros dieron lugar a que los gobiernos militares de la época incrementen sus gastos, y producto de un excesivo egreso corriente se causó fuertes desequilibrios fiscales, sin embargo, la capacidad exportadora del país y al fácil acceso al mercado financiero internacional venía salvando de alguna forma la economía nacional acompañado de un acelerado endeudamiento externo tanto público como privado.

Ello seguía generando una inversión privada creciente y la acumulación de recursos en el sector industrial urbano lo que ocasionó también la migración campesina a las ciudades. Este proceso es interrumpido bruscamente en 1982 cuando el Ecuador no puede cumplir con el servicio de la deuda externa y se ve obligado a declararse en mora, que junto con otros fenómenos acumulados dan origen a la crisis económica de los 80, sus consecuencias fueron graves.

Luego se ejecutó reformas estructurales, en el sector privado se buscó mejorar la competitividad de nuestros productos en el mercado internacional, lo que provocó que incluso el Estado asuma la deuda del sector privado y la transfiere a la del sector público; complicando aún más la ya difícil situación de la deuda pública externa. Por tanto, la temática general durante los años 80's es ya de una crisis económica.

Y en este contexto, de cambios de estructura en el que las empresas y corporaciones son actores principales, en el ámbito penal, se escuchaban tesis tanto negativas como afirmativas de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pues ya ocasionaban y se vislumbraba posibles lesiones y daños a bienes jurídicos. Entre las tesis más sobresalientes, que fueron expuestas en mi trabajo doctoral, constan las siguientes:

Como tesis negativas, los doctrinarios como Jiménez de Asúa (1945:287) mencionaban lo siguiente: *"Si se quiere responsabilizar a una organización o a un partido, se tropieza con la responsabilidad que hay en las leyes de casi todos los pueblos, sólo se la dirigen en contra de la persona humana y*

*no puede alcanzar a la persona jurídica"*.

Bajo esta perspectiva, la escuela positivista, que recurre al método experimental, consideraba al delito como un fenómeno humano que afecta a la sociedad y no ente jurídico o una creación de la ley y que su gravedad depende no del daño que se causa, sino de la peligrosidad de su agente, pues el delito es influido por factores biológicos, cósmicos y sociales, pero también por la índole particular del agente.

La escuela correccionalista consideraba que el delincuente es un enfermo cuya expresión patológica es el crimen y los castigos constituyen la medicina que debe aplicar la autoridad para impedir que se propague el mal.

La escuela pragmática consideraba que el delito no siempre constituye un ataque contra el grupo social, sino que, más frecuentemente, una expresión de sus defectos y lo que importa no es suprimir los delitos sino las causas que los engendraron. Concibe al delincuente como un hombre capaz de enmienda.

La escuela humanista consideraba que el delito es una violación de los sentimientos morales y de la moral social, declara que sólo pueden ser considerados culpables quienes resulten educables por medio de la pena.

La escuela del idealismo activista y sus representantes Maggiore y Spirito parten de la base de que el espíritu se expresa mediante realidades, y que todo lo real en el actuar humano es espiritual, todo hombre que actúa lo hace espiritualmente y por esa razón, o sea por su acto le pertenece con absoluta exclusividad, debe responder por él.

Para Ortolán la única persona, que reúne los requisitos para ser responsable de un delito es el hombre, por cuanto él es capaz de ser imputable, ya que, puede conocer lo que es justo y lo que es injusto y además posee libertad para decidir sus acciones.

Frente a la responsabilidad de las personas jurídicas dice: *"Los seres jurídicos o colectivos como el Estado, las municipalidades, los establecimientos públicos, hospicios, corporaciones, o asociaciones organizadas en personas civiles, pueden muy bien, en ciertos casos, ser obligados a reparaciones civiles, pero no pueden jamás, en principio racional, ser agentes penalmente responsables de delitos. La responsabilidad penal es individual y pesa exclusivamente sobre cada uno de los que personalmente han tomado parte en el delito, excepto con respecto a los seres jurídicos..."*

De ahí que, estas son las corrientes y escuelas

que se mostraban contrarias a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y que predominaban durante los años 80's, fundamentos doctrinarios que tienen que ver con lo que mencionaba Hippel: *"la responsabilidad penal de las personas jurídicas ataca el principio de la personalidad de las penas..."* en consonancia con lo que sostiene Finger: *"no se puede hablar de penas a la corporación pues la pena más importante, que es la privacidad de la libertad no puede serle aplicable."*

Sin embargo, también existían tesis afirmativas, cuya raigambre histórica fueron las legislaciones antiguas como el derecho germano y el viejo derecho francés, pues la responsabilidad colectiva era muy frecuente en el antiguo derecho. El Código de Hamurabi, las más antigua ley conocida, acoge la responsabilidad colectiva para determinados delitos, Grecia reprimía así mismo algunos delitos colectivos, no así Roma que rechazó esta figura y aquellos actos que desde el punto de vista patrimonial se consideraban propios de corporaciones, desde el punto de vista penal se concebía como actos particulares que habían obrado en común y por tanto la pena a imponerse recaía completamente sobre todos estos.

Conforme se ha mencionado, para los germanos la responsabilidad colectiva se efectivizaba cuando la población dividida en grupos, ligados por una responsabilidad recíproca, debían entregar al criminal responsable del delito o en su defecto quedaban obligados al pago de una cantidad pecuniaria.

En la edad media la responsabilidad colectiva existió en muchos países, en España en varios fueros como el de León, Nágera, Navarra, etc. Hay que anotar además que en estos tiempos el derecho canónico empleó como arma la institución denominada *"interdictum locale"* que se refería a todo un estado, diócesis o ciudad.

Estos son los antecedentes para la configuración de las tesis afirmativas, así: la teoría de la voluntad sostenía que las personas jurídicas no son seres ficticios sino personas reales dotadas de conciencia y voluntad propia, distinta e independiente a la de los asociados, y en ésta línea, Zitelman mencionaba: *"Así como el cuerpo humano es cosa distinta de una mera adición de hidrógeno, oxígeno y azoe de huesos, carne y sangre, puesto que hay un principio de unidad resultante de una fuerza desconocida en su esencia, pero perceptible en sus efectos, que se llama vida, así también en la asociación hay algo más que la mera adición de los asociados, pues nace un nuevo*

*ser real que tiene una voluntad independiente de la de aquellos."*

Otra tesis, afirmaba que la responsabilidad penal de las personas jurídicas no ataca el principio jurídico de la personalidad de las penas, sino por el contrario, lo afirma ya que si el hecho culpable ha sido un acto corporativo, la pena que se impone a la corporación es justa respecto a los miembros que han participado en el acto criminal, y es también justa respecto a los que no han intervenido, puesto que está en la naturaleza de todo organismo social que sus miembros soporten el bien y el mal.

En esta línea, los finalistas también mantienen su tesis de la posibilidad de aplicar penas a las asociaciones, incluso como la pena de muerte mediante la disolución, y sobre todo, las pecuniarias.

Entre las tesis afirmativas, hay una que se ha dejado aparte como es la tesis de la escuela jusfilosófica y que a su vez tiene como base los argumentos expuestos en una sentencia de 20 de diciembre de 1944 de la Corte Suprema de Argentina en la que se determinaba la condena al pago de una multa a la Dirección General de Hospitales de Santiago del Estero; motivada por ciertas Ordenanzas Aduaneras que hacían posible la imposición de sanciones penales y pecuniarias a las personas jurídicas. Así también se mencionaba que dichas normas no se aplican ni a las personas jurídicas con fines políticos, ni a los órganos de la administración pública.

Bajo ésta perspectiva, Aftalion justificaba la responsabilidad de las personas jurídicas con argumentos jusfilosóficos cuando decía que: *"nada puede coartar la posibilidad que tiene el derecho para hacer recaer las consecuencias en quien ha sido agente material de las transgresiones"*. En efecto esta perspectiva la posición normativa estimativa de la teoría egológica del derecho muestra que la cuestión no consiste en preguntar si "es posible" hacer penalmente responsable a las personas jurídicas sino en determinar en cada caso si ello es justo o no.

En vez de tratar el problema como si fuera de naturaleza entitativa, hay que considerarlo como de naturaleza axiológica, y tratarlo con arreglo a los criterios metodológicos que exigen esta clase de cuestiones.

De ahí que, durante los años 80's, con las tesis negativas como afirmativas, expuestas en resumen en líneas anteriores, se mantenía el cuestionamiento frente a la diferencia entre sanción civil y penal de las personas jurídicas, para lo cual se contaba con un criterio generalizado en cuanto a si la sanción tiene



un carácter preventivo, represivo; es sanción penal y si esta sanción es de carácter reparatorio, compensatorio; es civil.

Se tomaba en cuenta los fundamentos de Kelsen cuando mencionaba que la clase de sanción penal es el castigo que priva la vida, la salud, la libertad, la propiedad. Más tarde se hizo una división y apareció entonces la sanción civil conocida con el nombre de daños y perjuicios, privación de la propiedad, privación de la libertad por medio de la fuerza, en reparación o compensación del daño causado ilegalmente.

Naturalmente que esta división es en cuanto a los efectos de la sanción, pero si analizamos el origen es el mismo, es decir, la sanción viene del incumplimiento de un deber jurídico, dado el incumplimiento de la prestación, debe ser la sanción. De ahí que, la sanción en esencia constituye un dato de la experiencia jurídica que proviene del incumplimiento de la norma objetiva. Tanto la conducta descrita por la norma que prescriba la sanción civil como penal constituyen un dato jurídico, conducta e interferencia subjetiva; estas participan de la misma esencia, no existen mayores diferencias externas y el matiz diferencial de carácter secundario reside en el propósito que se persigue al determinar prácticamente el resultado de la sanción: compensatorio en unos casos, preventivo, represivo en otros, lo que también es relativo.

Por lo que en aquel tiempo, ya se concluía que las personas jurídicas son susceptibles de sanción penal, en efecto existían sanciones legales existentes en el ordenamiento jurídico vigente como las de derecho penal administrativo pero que no son aplicables en forma general sino de acuerdo al caso en concreto.

Dichas sanciones son generalmente pecuniarias; de utilidad práctica y facilidad de ejecución como lo son las multas fijas, multas variables, multas diarias, con cuantía limitada o de forma sucesiva. Así también las no pecuniarias y que pueden ser la revocatoria de permisos, licencias o autorizaciones, toma de posesión de establecimientos bancarios o sometidos a las superintendencias de control, liquidación administrativa forzosa, caducidad o suspensión de licencias o permisos, caducidad de contratos, suspensión de personería jurídica, cierre de establecimientos, decomiso de mercaderías, retiro de valores del mercado bursátil, suspensión de la producción de artículos, etc.

Las infracciones administrativas y los delitos usualmente han sido enmarcados como ilícitos, y

ambos constituyen manifestaciones del poder punitivo y por tanto ya se confirmaba que no presentan divergencias ontológicas o cualitativas.

Además, de lege lata la conclusión no podía ser otra pues los sistemas penales de estos países estaban claramente basados en una responsabilidad penal individual. La ya existente responsabilidad civil y administrativa de empresas o personas jurídicas era, por lo demás, considerada suficiente para controlar las nuevas formas de criminalidad.

Así, se defendía la tesis de la responsabilidad de las personas jurídicas en el Ecuador para su aplicación y la posibilidad de incorporar legislativamente la figura penal que aportaría la lucha contra la delincuencia organizada, generada por los cambios de estructura económica y política de la época muy a pesar del aforismo "societas delinquere non potest" que dominaba en la doctrina penal de los países con influencia europea-continental la discusión teórica sobre la responsabilidad penal de los entes colectivos.

### INCORPORACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURIDICAS EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL -COIP-.

El Código Orgánico Integral Penal incorpora por primera vez en nuestra legislación penal una regulación sobre la responsabilidad de las personas jurídicas, importante gestación de esta figura en el ordenamiento jurídico interno, generando un debate jurídico en cuanto a sus características específicas.

La legislación nacional opta por un modelo mixto de responsabilidad de las personas físicas de las empresas y de la persona jurídica como tal con ciertos rasgos de independencia, de tal forma que se puede incurrir en responsabilidad de la persona jurídica sin que concurra de la persona física.

#### • Responsabilidad de las personas físicas de las empresas:

El artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal establece: *"En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas nacionales o extranjeras de derecho privado son penalmente responsables por los delitos cometidos para beneficio propio o de sus asociados, por la acción u omisión de quienes ejercen su propiedad o control, sus órganos de gobierno o administración, apoderadas o apoderados, mandatarias o mandatarios, representantes legales o convencionales, agentes, operadoras u operadores, factores, delegadas o delegados, terceros que con-*

tractualmente o no, se inmiscuyen en una actividad de gestión, ejecutivos principales o quienes cumplan actividades de administración, dirección y supervisión y, en general, por quienes actúen bajo órdenes o instrucciones de las personas naturales citadas.

La responsabilidad penal de la persona jurídica es independiente de la responsabilidad penal de las personas naturales que intervengan con sus acciones u omisiones en la comisión del delito.

No hay lugar a la determinación de la responsabilidad penal de la persona jurídica, cuando el delito se comete por cualquiera de las personas naturales indicadas en el inciso primero, en beneficio de un tercero ajeno a la persona jurídica.”

- **Responsabilidad de la persona jurídica como tal:**

El artículo 50 del Código Orgánico Integral Penal establece: “La responsabilidad penal de las personas jurídicas no se extingue ni modifica si hay concurrencia de responsabilidades con personas naturales en la realización de los hechos, así como de circunstancias que afecten o agraven la responsabilidad o porque dichas personas han fallecido o eludido la acción de la justicia; porque se extinga la responsabilidad penal de las personas naturales, o se dicte sobreseimiento.

Tampoco se extingue la responsabilidad de las personas jurídicas cuando estas se han fusionado, transformado, escindido, disuelto, liquidado o aplicado cualquier otra modalidad de modificación prevista en la Ley.”

Las penas correspondientes, una vez verificada la responsabilidad de las personas jurídicas son las que constan en el artículo 71 del Código Orgánico Integral Penal:

“Las penas específicas aplicables a las personas jurídicas, son las siguientes: 1. Multa. 2. Comiso penal. Los actos y contratos existentes, relativos a los bienes objeto de comiso penal cesan de pleno derecho, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe, que se reconocen, liquidan y pagan a la brevedad posible, quienes deberán hacer valer sus derechos ante la o el mismo juzgador de la causa penal. Los bienes declarados de origen ilícito no son susceptibles de protección de ningún régimen patrimonial. 3. Clausura temporal o definitiva de sus locales o establecimientos, en el lugar en el que se ha cometido la infracción penal, según la gravedad de la infracción o del daño ocasionado. 4. Realizar actividades en beneficio de la comunidad sujetas a seguimiento y evaluación judicial. 5. Remediación integral de los daños ambientales causados. 6. Disolución de la persona jurídica, ordenado

por la o el juzgador, en el país en el caso de personas jurídicas extranjeras y liquidación de su patrimonio mediante el procedimiento legalmente previsto, a cargo del respectivo ente público de control. En este caso, no habrá lugar a ninguna modalidad de recontratación o de reactivación de la persona jurídica. 7. Prohibición de contratar con el Estado temporal o definitivamente, según la gravedad de la infracción.”

De ahí que, la situación legislativa en nuestro país sobre la responsabilidad de las personas jurídicas con relación a los tipos penales diversos ha evolucionado notablemente lo cual ha cuestionado de forma positiva el tradicional principio de la incapacidad de las personas jurídicas para ser penalmente responsable de los delitos.

El COIP representa un paso importante al establecer como se ha visto, en forma sistemática las penas de los delitos en los que incurrirían las personas jurídicas con el catálogo exclusivo para aplicarse en forma directa.

## SISTEMA DE IMPUTACIÓN A LAS PERSONAS JURIDICAS:

- **De la capacidad de acción:**

Ya lo hemos mencionado con respecto al debate dogmático generado en décadas anteriores, por el cual se sostiene que las personas jurídicas no poseen capacidad de acción propia sino que son las personas físicas con sus acciones naturales las que incurrirían en responsabilidad penal.

Sin embargo, otras escuelas y corrientes dogmáticas han mencionado que las personas ideales si tienen capacidad de acción, del mismo modo que la tienen en el derecho civil, administrativo como para la celebración de contratos entre particulares y con el Estado mismo y que por tanto no se puede sostener su capacidad únicamente en determinadas áreas del derecho sino que debe reconocerse en todas como lo es en el derecho penal.

Rusconi ya lo ha mencionado: “...es preciso abandonar cualquier intento de diseñar el sistema de imputación sobre bases causales, ónticas o naturales. No es posible explicar el modelo de responsabilidad de las personas ideales de la mano de las viejas pretensiones de las ciencias físicas en la teoría del ilícito. Sin embargo, no deberíamos creer que este abandono se debe en forma exclusiva a los requerimientos del problema político-criminal de las responsabilidades de las personas ideales; no hace falta recordar la vigen-

*cia en los últimos cincuenta años... en donde todos los datos físicos –o casi todos-, el autor o la nitidez empírica de su inferencia han perdido, quizás para siempre, un protagonismo reconocible... El desdibujamiento de las colaboraciones puramente físicas en el ilícito, acarrea, como lógica consecuencia, un debilitamiento del autor, identificable como un agente que ha puesto en el mundo real una condición para la producción del resultado. En este sentido las personas jurídicas estarían tan sometidas a una decisión normativa de atribución como las personas físicas.”*

Con ello se estaría ratificando doctrinariamente lo que nuestra legislación ha establecido, que el concepto de acción de la persona ideal es jurídico, toda vez que fue sometido a la decisión del legislador y plasmado en el texto normativo penal. En este sentido, Mir Puig advierte que las respuestas sobre la capacidad de acción en el derecho privado y penal difieren y por ende se opera efectivamente con un concepto de acción jurídico y por tanto hasta modificable por medio de reformas desde la misma ley penal.

Y es preciso señalar a Rusconi (2009:626) nuevamente cuando menciona que: *“...no se trata de saber si las personas jurídicas tienen una capacidad de acción real, identificable en el mundo físico, sino de averiguar si es legítimo imputarles las acciones realizadas por quienes, indudablemente, si la tienen y actúan en su representación: sus órganos. Es decir... se trata de una manifestación más de la normativización del ilícito que ya no es causación sino imputación.”*

Lo cual continua ratificado su apoyo a esta figura penal mientras dice que: *“Es posible hoy pensar que la propia evolución de la teoría del delito y de sus puntos de partida metodológicos han facilitado el desarrollo de modelos de imputación para ser aplicados en el derecho penal de la empresa...”* (Rusconi, 2009:627)

- **De la culpabilidad:**

Ya en la categoría de la culpabilidad, desde el punto de vista señalado en el ámbito de la acción, el concepto de culpabilidad ya no es ajeno a las personas jurídicas, se piensa incluso que se trata de un parámetro no sólo ético sino hasta moral.

Gómez Jara Diez hace una equivalencia al concepto de culpabilidad individual, así:

*“La intrínseca relación que, conforme a la comprensión del derecho penal moderno, existen entre culpabilidad y pena, permite sostener que los fundamentos de la culpabilidad que, en relación con la*

*configuración de la persona en derecho penal se han venido estableciendo..., son los mismos que permiten sostener que las penas contra las empresas tienen verdaderamente el sentido de penas. Con otras palabras, en la medida en la que se considere que, conforme al (auto) entendimiento de la sociedad moderna, los fundamentos de la culpabilidad antes esbozados concurren en la organización empresarial, se abre camino para afirmar que se pueden: imponer sanciones sobre la empresa que realmente revistan un carácter de pena.”* (Pons, 2005: 298)

En esta línea, Rusconi (2009:690) ya nos advierte cuando refiere que: *“...hoy ya no sonaría extraña la propuesta de suplantarse el juicio de culpabilidad por criterios de proporcionalidad, que podría ofrecer un límite razonable al ius puniendi estatal. Así como la decisión político criminal preferible al momento de diseñar el sistema de imputación penal de las personas físicas reside en mantener la vigencia del aspecto garantista del principio fundamental del libre albedrío, no hay demasiados obstáculos para revisar esa decisión externa cuando se evalúa la conducta de un ente ideal.”*

De la misma manera nos indica que *“...el juicio de culpabilidad puede ser redefinido, como lo propone ahora el derecho comunitario europeo, atendiendo a la comparación del accionar de la empresa con otras del mismo tamaño o importancia económica similar y situación fáctica equivalente...”* (Rusconi, 2009:691)

Por ende, la culpabilidad opera para las personas jurídicas, es atribuible a empresas y corporaciones que por ejemplo causan daños ambientales, financieros, etc. Y que justificada además por la protección jurídica de ciertos bienes que los diferentes tipos penales encierran.

- **De la punibilidad:**

Esta última categoría, de la pena como consecuencia jurídica del cometimiento de un delito se manifiesta expresamente en el Código Orgánico Integral Penal con un catálogo de penas propio para las personas jurídicas, que tienen su fundamento en decisiones político criminales y que no son más que la legitimación del poder punitivo del Estado en el marco del Estado de Derecho, activado luego de la verificación de un hecho ilícito, típico, antijurídico y culpable.

Bajo esta perspectiva Rusconi (2009:693) ha indicado que:

*“... se trata de riesgos esencialmente vinculados a la actividad empresarial que se manifiesta solo*



a través de los -efectos mediatos de la punición de la corporación-... sin embargo, es indudable que la intervención del derecho penal en el control de la actividad ilícita del ente ideal generará algún daño, allí donde no es deseable político-criminalmente... Sólo es posible a simple vista perfeccionar el sistema de reacciones penales buscando reducir el impacto de violencia, tender a la reparación del daño y limitar al máximo los efectos no deseados de la sanción. Sin embargo, esta búsqueda le corresponde a todo el sistema penal, no es patrimonio exclusivo de las dificultades propias de la sanción de las corporaciones”

De ahí la prevención general como la especial adquieren su eficacia en el mundo económico donde se desarrolla mayormente el accionar de las personas jurídicas.

### LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURIDICAS EN EL ESPACIO DEL SECTOR FINANCIERO:

Este subtema abordará el derecho penal económico del sistema financiero que he considerado importante dado los sucesos financieros que afectaron nuestro país, conductas que generaron cuantiosas pérdidas a los ciudadanos particulares y profundas consecuencias negativas a la economía nacional y que sin duda mantienen una real trascendencia económica.

Para ello, es necesario definir al derecho penal económico “...como el conjunto de normas jurídico penales que protegen el orden económico, entendido éste como el conjunto de normas penales que sancionan las conductas que atentan gravemente bienes jurídicos importantes para el funcionamiento del sistema económico y para el libre desarrollo individual dentro de dicho sistema”. (Pariona, 2005:278)

En lo que respecta a los delitos económicos, éstos podrían ser definidos como “aquellos comportamientos descritos en las leyes que lesionan la confianza en el orden económico vigente con carácter general o en alguna de sus instituciones en particular y, por tanto, ponen en peligro la propia existencia y las formas de trabajo de ese orden económico”. (Rusconi, 2009:695)

Así también, la infracción financiera, es la que ataca las “finanzas”, es decir, los recursos pecuniarios, el dinero de las víctimas, que pueden ser privadas o públicas. En el caso específico del sistema monetario y financiero, a continuación los tipos penales que el Código Orgánico Integral Penal -COIP- establece, así:

El artículo 322 sobre el tipo penal de pánico financiero: “La persona que divulgue noticias falsas que causen alarma en la población y provoquen el retiro masivo de los depósitos de cualquier institución del sistema financiero y las de la economía popular y solidaria que realicen intermediación financiera, que pongan en peligro la estabilidad o provoquen el cierre definitivo de la institución, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.”

Así mismo el artículo 323 sobre la Captación ilegal de dinero: “La persona que organice, desarrolle y promocióne de forma pública o clandestina, actividades de intermediación financiera sin autorización legal, destinadas a captar ilegalmente dinero del público en forma habitual y masiva, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. La persona que realice operaciones cambiarias o monetarias en forma habitual y masiva, sin autorización de la autoridad competente, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.”

En concordancia con lo que establece el artículo 143 del Código Orgánico y Financiero que se refiere a la actividad financiera: “...actividad financiera es el conjunto de operaciones y servicios que se efectúan entre oferentes, demandantes y usuarios, para facilitar la circulación de dinero y realizar intermediación financiera; tienen entre sus finalidades preservar los depósitos y atender los requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos de desarrollo del país. Las actividades financieras son un servicio de orden público, reguladas y controladas por el Estado, que pueden ser prestadas por las entidades que conforman el sistema financiero nacional, previa autorización de los organismos de control, en el marco de la normativa que expida la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.”

Así mismo el artículo 144 del mismo cuerpo legal sobre la autorización para la actividad financiera:

“La Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en el ámbito de sus respectivas competencias, autorizarán a las entidades del sistema financiero nacional el ejercicio de actividades financieras. En la autorización indicada, se determinará las operaciones activas, pasivas, contingentes y de servicios financieros que podrán ejercer las entidades, por segmentos, de acuerdo con su objeto social, línea de negocio, especialidades, capacidades y demás requisitos y condiciones que para el efecto establezca la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.



*Las autorizaciones determinadas en este artículo constarán en acto administrativo motivado y serán emitidas previo el cumplimiento de los requisitos determinados en este Código y en las normas expedidas para el efecto. Las autorizaciones podrán ser revocadas por las causas señaladas en el presente Código. Las entidades del sistema financiero nacional, además de esta autorización y antes del inicio de operaciones, deberán obtener del organismo de control el respectivo permiso de funcionamiento, de acuerdo con el trámite que se establezca para el efecto. Solamente las personas jurídicas autorizadas por los respectivos organismos de control podrán utilizar las denominaciones: “banco”, “corporación financiera”, “almacén general de depósito”, “casa de cambio”, “servicios auxiliares del sistema financiero”, “cooperativas de ahorro y crédito”, “asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda” y “cajas centrales” y las demás específicas utilizadas en el presente Código y las normas que dicte la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. No podrán usarse expresiones que por una semejanza fonética o semántica, induzcan a confusión con las anteriores. La superintendencia correspondiente calificará la semejanza.”*

Dichas entidades del sector financiero son también aquellas extranjeras que establece el artículo 179 del Código Orgánico Monetario y Financiero: “Sucursales y oficinas de representación. Las entidades financieras extranjeras que se propongan establecer sucursales en el Ecuador, para ejercer actividades financieras o constituir oficinas de representación, deberán obtener autorización previa de los organismos de control nacionales. Las sucursales deberán previamente domiciliarse en el Ecuador. Las sucursales de entidades financieras extranjeras y las oficinas de representación estarán sujetas a las regulaciones que expida la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Los acreedores de una entidad financiera extranjera que haya establecido sucursal en el Ecuador no podrán ejercer derechos sobre los activos que la sucursal posea en el país. Las oficinas de representación solo servirán para actuar como centros de información a sus clientes y para efectuar las operaciones señaladas en el artículo 194 numeral 1 literal a) numerales 1 y 3 de este Código.”

Otro delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 324 es la Falsedad de información financiera, que se comete cuando: “La persona que, en su calidad de representante legal,

*directora, administradora o empleada de una entidad dedicada a la captación habitual y masiva de dinero, proporcione información falsa al público, con el fin de obtener beneficio propio o para terceros, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.”*

En concordancia con el artículo 224 del Código Orgánico Monetario y Financiero que establece sobre la información que debe proporcionar la entidad de control, “Los organismos de control informarán periódicamente al público en general respecto de la situación financiera de las entidades sometidas a su control. Se informará, por lo menos, sobre la estructura financiera, calidad de los activos, incluyendo los resultados generales de la última calificación de sus activos de riesgo, posición de patrimonio técnico e indicadores de solvencia, liquidez, eficiencia y rentabilidad.”

Se tipifica de la misma manera en el artículo 326 del Código Orgánico Integral Penal el Descuento indebido de valores, cuando: “Las entidades del sistema financiero y las de la economía popular y solidaria que realicen intermediación financiera, que sin autorización del organismo público de control respectivo, sin ningún aviso previo o mediante notificaciones tardías, descuenten o recorten valores o dineros de los cuentahabientes y tarjetahabientes, serán sancionadas con multa de diez a veinte salarios básicos unificados del trabajador en general. La persona que como directora, administradora o empleada de estas entidades haya autorizado los descuentos o recortes previstos en el inciso precedente, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.”

Como se puede observar de la lectura de los artículos antes transcritos, bajo el establecimiento de un principio general de responsabilidad penal de las personas jurídicas permite la persecución de tales delitos para evitar la proliferación de la delincuencia y los riesgos que se generarían en la economía nacional por sus consecuencias.

Los delitos financieros o los comportamientos que atentan contra el sistema financiero constituyen, a no dudarlo, los más claros ejemplos de la delincuencia contra el orden económico social, entendida ésta como los comportamientos que lesionan o ponen en peligro la intervención del Estado en la economía. Además, la delincuencia socioeconómica amenaza la estructura del Estado, pues ataca la confianza del público en el sistema financiero, económico y social. Para lo cual es necesario añadir que el objetivo del

Derecho Penal es castigar eficazmente todo tipo de delincuencia: tanto los pequeños robos pero sobre todo los grandes delitos financieros.

Por lo expuesto, es preciso mencionar que la relevancia de la participación de las personas jurídicas en el mundo económico contemporáneo no puede ser hoy en día soslayada lo cual plantea nuevos retos de forma significativa en el campo del derecho penal, así se menciona que: *“...no parece compatible con tal concepción que la actividad comercial desarrollada por la persona jurídica trascienda la existencia física de sus integrantes. El mundo de los negocios demues-*

*tra lo contrario. Los directivos, los socios, etc. desaparecen, permutan, renuncian, pero la sociedad se conserva incólume como ente independiente.”* (Aboso, 2000:187)

Ahora el desafío en el mundo contemporáneo es debido al cambio de época en el cual la máquina la revolución tecnológica promueve una visión cibernética del mundo. Por ello es que el derecho penal en sintonía con la evolución de los fenómenos económicos, sociales, y políticos debe hacer efectivos sus instrumentos internacionales y locales capaces de defender y proteger los diversos bienes jurídicos de la sociedad.

## BIBLIOGRAFÍA:

- Aboso, Gustavo Eduardo. 2000. “Responsabilidad de las personas jurídicas en el derecho penal”. Editorial B d F, Montevideo-Buenos Aires.
- Bacigalupo, Silvina. 1998. “La responsabilidad de las personas jurídicas”. Bosch, Barcelona, España.
- Chiriboga Zambrano, Galo. 1981. “De la responsabilidad de la persona jurídica, de sus gerentes, directores y administradores”. Tesis Doctoral.
- Código Civil ecuatoriano.
- Código Orgánico Integral Penal.
- Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, Palermo, noviembre 2000.
- Jiménez de Asúa. 1945. “El criminalista”. Editorial La Ley, Buenos Aires, Argentina.
- Pariona Arana, Raúl. 2005. “Aproximaciones al derecho penal económico: del Nacimiento de un nuevo derecho penal a una aproximación crítica”. Nuevas tendencias del derecho penal económico y de la empresa, Lima.
- Pons, Marcia. 2005. “La culpabilidad penal”. Madrid, España.
- Rusconi, Maximiliano. 2009. “Derecho Penal. Parte General”. Ediciones Ad-hoc, segunda edición.



## *La violencia intrafamiliar y de género, como factores criminógenos de orden exógeno, en el delito de femicidio según los lineamientos del derecho penal panameño.*



**Dra. Julia Elena Sáenz González**

Catedrática de Derecho Penal y Directora del Observatorio Legislativo, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, de la Universidad de Panamá

### RESUMEN

**E**l delito en términos generales puede ser ocasionados por diferentes causas, ya sean de orden externo como interno; en los delitos de violencia doméstica o intrafamiliar y el delito de femicidio y la violencia de género, la falta de tolerancia y el respeto a la persona del ser humano, de los derechos humanos que este tiene, son los que motiva el surgimiento de todo tipo de violencia entre las personas de uno u otro sexo. En la actualidad, debido a la alteración de valores que tiene la sociedad en términos generales, el ser humano, sobre todo el hombre, se considera superior a la mujer, fenómeno que tiene orígenes bíblicos, cuando se dice que Dios creó primero al hombre y luego de su costilla crea a la mujer, quien será su compañera. Desde ese momento se le sitúa a la mujer con calidad de acompañante que deberá evitar que el hombre se sienta solo; la función de la mujer será la de ofrecer satisfacción en todos los aspectos al varón.

Lo expuesto en el párrafo anterior nos indica que la violencia, atenta contra el derecho humano de la igualdad entre las personas, trayendo como resultado la alteración de la paz y el orden en la sociedad, motivando el incremento de la delincuen-

cia y desmoronamiento de la familia como estructura base de la sociedad y, por ende, del Estado.

**PALABRAS CLAVES:** Delito, familia, violencia, femicidio, violencia intrafamiliar.

### GENERALIDADES

Es importante señalar que nuestro tema gira en torno a términos fundamentales como lo son: familia, doméstica, violencia y género; razón por la cual pasaremos a plantear algunas definiciones que al respecto plantea la doctrina, como por ejemplo:

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la violencia como *“El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.”*

El diccionario virtual Definición.De, define el término violencia de la siguiente manera: *“Del latín violentia, la violencia es la cualidad de violento o la acción y efecto de violentar o violentarse. Lo violento, por su parte, es aquello que está fuera de su natural estado, situación o modo; que se*

ejecuta con fuerza, ímpetu o brusquedad; o que se hace contra el gusto o la voluntad de uno mismo. La violencia, por lo tanto, es un comportamiento deliberado que puede provocar daños físicos o psíquicos al prójimo. Es importante tener en cuenta que, más allá de la agresión física, la violencia puede ser emocional mediante ofensas o amenazas. Por eso la violencia puede causar tanto secuelas físicas como psicológicas.

Existen muchas teorías acerca de la violencia y entre ellas destaca la conocida como Triángulo de la Violencia, que fue desarrollada por el sociólogo noruego Johan Galtung, uno de los expertos más importantes en materia de conflictos sociales y de la paz. Con aquella terminología lo que hace aquel es establecer la conexión y la relación que existe entre los tres tipos de violencia que considera que existen en la sociedad. Es decir, entre la violencia cultural, la estructural y la directa.

La primera, la llamada cultural, es la que se manifiesta a través de obras de arte, la ciencia o la religión, entre otras áreas. La segunda, la llamada estructural, por su parte es la que se considera más peligrosa de todas ellas pues es la que se origina, a través de diversos sistemas, como consecuencia de no poder o no ver satisfechas las necesidades que se tienen.

Y finalmente está la violencia directa que es la que se realiza de manera física o verbal sobre personas, contra el medio ambiente o contra los bienes de la sociedad en general. .... La violencia busca imponer u obtener algo por la fuerza. Existen muchas formas de violencia que son castigadas como delitos por la ley. De todas formas, es importante tener en cuenta que el concepto de violencia varía según la cultura y la época."

Para el jurista Cabanellas de Torres (2000:135), el término doméstica o doméstico, implica "perteneiente o relativo a la casa..."

El diccionario WordReference.com, expresa que "doméstica. Inflexiones de doméstico. De la casa o el hogar o relativo a ellos."

Retomando nuevamente el diccionario virtual Definición.De, nos plantea: "La familia es la agrupación social más importante de los seres humanos. Se trata de una forma de organización que se basa en la consanguinidad (como la filiación entre padres e hijos) y en el establecimiento de vínculos reconocidos social y legalmente (el matrimonio). Los integrantes de una familia suelen vivir en un mismo hogar y compartir la vida cotidiana... violencia intrafamiliar,... es el ejercicio de la violencia en el seno de

la familia. Es decir, la acción u omisión que el integrante de una familia ejerce contra otro integrante y le produce un daño físico o psíquico.

La violencia intrafamiliar, también nombrada como violencia familiar o violencia doméstica, puede incluir distintas formas de maltrato, desde intimidación hasta golpes pasando por el acoso o los insultos. El violento puede ejercer su accionar contra un solo integrante de la familia (como su pareja o su hijo) o comportarse de forma violenta con todos."

Para el tratadista Ferro Torres (2011:516): "La expresión familia extendida cubre a todos los ascendientes, descendientes, colaterales, adoptantes, adoptivos y afines....La familia..., precisando que son integrantes de ésta los cónyuges o compañeros permanentes, el padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo lugar, los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos y todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integradas a la unidad doméstica...."

Con respecto a la violencia familiar, la Dra. Bogado, Zulema (2013) nos indica: "Toda acción u omisión cometida en el seno de la familia por uno o más de sus miembros, que menoscaba la vida o la integridad física, psicológica, o incluso la libertad de otro de sus miembros, y que causa un serio daño al desarrollo de su personalidad. Alude a todas las formas de relaciones familiares, donde alguien con más poder abusa de alguien con menos poder."

Por otro lado, el jurista mexicano Cruz Santos, Manuel (2010) considera que "... por violencia familiar, debemos entender aquel acto de poder u omisión intencional dirigido a maltratar a los miembros de un grupo social de convivencia íntima y permanente, unido por vínculos de matrimonio, concubinato, parentesco, filiación o cualquier circunstancia y cuyo sujeto activo es otro de los miembros de ese mismo grupo. El medio por que se produce la violencia familiar es el maltrato, esto es, el cúmulo de agresiones u omisiones que sufre el ofendido y que derivan de la conducta del agresor."

Por último, tenemos que el término género, utilizando nuevamente los lineamientos que al respecto ha impartido la OMS (Organización Mundial de la Salud), este se refiere a "Los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres. Las diferentes funciones y comportamientos pueden generar desigualdades de género, es decir, diferencias entre los hombres y las



*mujeres que favorecen sistemáticamente a uno de los dos grupos.”*

Luego de haber planteado la información obtenida de diferentes fuentes sobre los términos: familia, violencia y doméstica podemos señalar que la violencia doméstica, también denominada violencia familiar, de familia o intrafamiliar equivale al acto o conjunto de actos, realizado en el seno de una familia, por uno de sus miembros hacia otro u otros miembros, tendientes a ocasionar daño físico o psicológico que muchas veces puede traer como consecuencia la muerte de la víctima o la afectación de manera permanente de los derechos humanos de estas personas.

El fenómeno de la violencia doméstica puede tener su origen en aspectos culturales, en desórdenes en la salud psicológica o costumbres adquiridas en la educación tanto de la víctima como del agresor o agresora.

En este mismo orden de ideas es necesario señalar que al momento que hacemos alusión a la violencia de género, nos referimos a ese comportamiento guiado por impulsos desmedidos tendientes a causar una lesión o daño a una persona natural por sentir menosprecio hacia ella, debido al sexo al cual pertenece y, a lo que el mismo implica. Aunque el género hace referencia, en principio al sexo a que pertenece un ser humano, se considera que cuando hablamos de violencia de género nos estamos refiriendo a violencia contra la mujer por pertenecer al sexo femenino.

La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belem Do Pará”, indica en su artículo 1, que “Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.”

De lo antes expuesto, se colige que los Organismos Internacionales, como Naciones Unidas, consideran que cuando nos referimos a la violencia de género hacemos alusión principalmente a cualquier forma de violencia contra la mujer debido al sexo al cual pertenece. Inmediatamente debemos entender que estamos ante la presencia de actos discriminatorio que manifiestan algún tipo de desprecio hacia la mujer atribuido a todo lo que se deriva de su femineidad.

La legislación panameña acuña el espíritu de esta

normativa del Derecho Internacional, cuando en el artículo 3 de la ley 82, de 24 de octubre de 2013, sobre el femicidio, manifiesta que: “Se entenderá por violencia contra las mujeres cualquier acción, omisión o práctica discriminatoria basada en la pertenencia al sexo femenino en el ámbito público o privado, que ponga a las mujeres en desventaja con respecto a los hombres, les cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, que incluye las perpetradas desde el Estado o por sus agentes.”

Podemos observar con esta definición que la violencia de género puede ser lo que motive una violencia doméstica o violencia intrafamiliar, aunque ésta última pueda tener otros causales, como por ejemplo: resentimientos con los padres, celos, complejos de inferioridad entre los miembros que conforman el núcleo familiar, entre otros.

En aquellos casos en que la violencia doméstica consista en malos tratos, tanto de carácter físico como psicológicos, que el esposo propina a su esposa, por considerarla poca cosa, simplemente por ser mujer, depender económicamente de él y quedarse en la casa cuidando a los hijos, nos encontramos ante el delito de violencia intrafamiliar o doméstica que ha sido causada por la violencia de género y si producto de esta acción el esposo ultima o priva de la vida a la esposa estaríamos ante la presencia del delito de homicidio mejor conocido como femicidio.

## ANÁLISIS JURÍDICO – PENAL DE LOS DELITOS DE FEMICIDIO, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y VIOLENCIA DE GÉNERO.

### • Delito de Violencia Doméstica o Violencia Intrafamiliar

La figura delictiva bajo estudio será analizada tomando en cuenta los siguientes aspectos: marco conceptual; verbo tipo; objeto jurídico; bien jurídico tutelado; sujetos; clase de delito; circunstancias modificadoras de la responsabilidad penal; tipicidad subjetiva/formas de culpabilidad; situaciones jurídicas derivadas o relacionadas con el delito; Derecho Internacional y otras leyes.

Estos aspectos pueden ser apreciados a través del mapa conceptual siguiente:

### • Marco Conceptual

El delito de violencia doméstica se encuentra

tipificado como tal en el código penal panameño, en su Libro II, Título V (Delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil), Capítulo I (Violencia Doméstica), en los artículos que van del 200 al 201. Por su parte, el artículo 200, lo define en los siguientes términos:

*“Quien hostigue o agreda física, sicológica o patrimonialmente a otro miembro de la familia será sancionado con prisión de 5 a 8 años y tratamiento terapéutico multidisciplinario en un centro de salud estatal o particular que cuente con atención especializada, siempre que la conducta no constituya delitos sancionados con pena mayor. En cualquiera de estos casos, la autoridad competente aplicará las medidas de protección correspondientes a favor de las víctimas. Esta pena se aplicará a las lesiones físicas que produzcan una incapacidad no superior a los treinta días. Para los efectos de este artículo, las conductas descritas son aplicables en caso de: 1. Matrimonio. 2. Unión de hecho. 3. Relación de pareja que no haya cumplido los cinco años, cuya intención de permanencia pueda acreditarse. 4. Parentesco cercano. 5. Personas que hayan procreado entre sí un hijo o hija. 6. Hijos o hijas menores de edad no comunes que convivan o no dentro de la familia. Igualmente se aplicarán las situaciones señaladas en los numerales anteriores, aun cuando estas hayan finalizado al momento de la agresión. En caso de incumplimiento de la medida de seguridad impuesta, el Juez de Cumplimiento deberá sustituirla con la pena de prisión que corresponda.”*

De lo expuesto en epígrafes anteriores podemos colegir que el delito de violencia doméstica o intrafamiliar es un acto criminoso o hecho punible que se materializa mediante la realización de un conjunto de actos idóneos, concatenados entre sí, llevados a cabo exclusivamente entre personas que se encuentran unidas por algún tipo o clase de parentesco y, a su vez, dichos actos constituyen comportamientos o conductas que manifiestan diferentes acciones de violencia, ya sea física, sicológica, sexual o patrimonial. Tomando siempre en consideración que dichas acciones son realizadas por personas que están en pleno uso y control de sus facultades mentales y que entienden la magnitud de los mismos y las consecuencias jurídicas que de ellos se derivan.

Del concepto planteado se pueden identificar, en el delito bajo estudio, las siguientes características:

- Las acciones que conforman los actos idóneos pueden conformar diferentes clases o formas

de violencia, entre las que podemos mencionar: física, sicológica, sexual y patrimonial.

- Entre la víctima y el agresor existe un vínculo de parentesco, que es conocido por ambos.
- Que el lazo de parentesco entre la víctima y el agresor pueden estar o no vigentes al momento de la perpetración del acto. Es decir, puede ser que el matrimonio o la relación de pareja, en el instante en que se realiza la conducta ilícita haya finaliza. Ej.: ambos cónyuges se hayan divorciado con anterioridad.
- Una relación de poder por parte del agresor con respecto a la víctima
- **Verbo Tipo:**

La conducta ilícita que constituye este delito puede estar conformada ya sea por el hostigamiento o la agresión, pudiendo ser ambos de carácter físico, psicológico o patrimonial.

La palabra hostigamiento es definida por la ley 82, en su artículo 4, de la siguiente manera: *“Para los efectos de esta ley, los siguientes términos se entenderán así...8. Hostigamiento. Acto u omisión, no necesariamente con motivaciones sexuales, con abuso de poder, que daña la tranquilidad, autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, impide su desarrollo y atenta contra la equidad....”*

Podemos advertir, que el hostigamiento es un comportamiento que involucra una relación de poder entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, en la cual una de las partes ejerce un control sobre el otro. Esto ha podido ser motivado por circunstancias tales como: la edad (con relación a los niños y ancianos), la capacidad adquisitiva o económica; es decir, la víctima depende, en la mayoría de las veces, de su agresor.

En cuanto a los términos violencia física, violencia patrimonial o económica y violencia psicológica, la misma excerta legal citada contempla lo siguiente: *“(...) 18. Violencia física. Acción de agresión en la que se utiliza intencionalmente la fuerza corporal, directa o por medio de cualquier objeto, arma o sustancia, que cause o pueda causar daño, sufrimiento físico, lesiones, discapacidad o enfermedad (...) 23. Violencia patrimonial y económica. Acción u omisión, en el contexto de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, que repercute en el uso, goce, administración, disponibilidad o accesibilidad de una mujer a los bienes materiales, causándole daños, pérdidas, transformación, sustracción, destrucción, retención o destrucción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos perso-*

nales, bienes, derechos y otros recursos económicos comunes.(...) 25. *Violencia psicológica. Cualquier acto u omisión que puede consistir en negligencia, abandono, descuido, celos, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y/o amenazas.*"

Hemos podido advertir con los señalamientos antes presentados que esta figura delictiva se materializa a través de la realización de un conjunto de actos idóneos concatenados entre sí pueden conllevar a dos situaciones: por una parte, puede ser el desequilibrio en cuanto a su paz, tranquilidad y sosiego como lo es el hostigamiento; o, en un daño, una lesión que traiga aparejado, por ejemplo: una enfermedad, un trauma físico, psicológico o económico.

Además, de lo antes expuesto, la jurisprudencia panameña, de la Sala Segunda de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia, mediante fallo fechado 28 de octubre de 2009, indica que los actos de hostigamiento o acoso físico, psicológico o patrimonial deben revestir la característica de habitualidad; es decir, que se repitan constantemente. Esto se colige del tenor siguiente: *"En torno a lo expuesto en el inciso que antecede, resulta oportuno tomar en consideración la noción de violencia doméstica. En este sentido, la doctora Aura Emérita Guerra de Villalaz aborda el asunto desde la siguiente perspectiva: "El concepto de violencia doméstica parte de la definición de violencia que consiste en el empleo de fuerza física o psicológica sobre una persona (vis absoluta y vis relativa). Estos actos de carácter violento dentro de la familia presentan particularidades específicas que lo identifican y distinguen de la violencia ejercida sobre cualquier persona... Estas conductas al repetirse continuamente, lesionan física y psíquicamente a las víctimas, menoscabando su dignidad y deteriorando su autoestima. Es por ello que la violencia doméstica y el maltrato de niños, niñas y adolescentes difieren del delito de lesiones. La habitualidad que se presenta como una de las características esenciales de este delito comprende la repetición de una misma conducta que se torna en costumbre y que establece un régimen de vida"*.

Tomando en consideración a la jurisprudencia panameña con respecto al delito de violencia doméstica, en la misma se destaca que el comportamiento de hostigar (molestar) o agredir deben tener la característica de ser continuos o habituales; es decir, un hecho de agresión aislado no debería ser considerado

como delito de violencia doméstica, sino que dependiendo del contexto en el cual se suscitó y el resultado ocasionado, ubicarse en la conducta delictiva producida. Es importante dejar por sentado, que esta no es nuestra postura, como penalista, ya que precisamente por esa razón se ha tipificado como delito la violencia doméstica, puesto que dichos actos que la constituyen no deben darse ni una sola vez.

#### • **Objeto Jurídico y Bien Jurídico tutelado**

En el delito de violencia doméstica o intrafamiliar tanto el objeto jurídico como el bien jurídico coinciden en uno mismo: la familia.

En este tipo de delitos, se realizan conductas de carácter disfuncional que afectan uno de los pilares de la sociedad y por ende del Estado, como lo es la familia; entendiendo como tal, a aquel grupo de personas unidas por vínculos tales como: el parentesco por consanguinidad, afinidad, jurídico y por la relación laboral entre personas que viven en un mismo lugar.

Por último, también consideramos que pueden considerarse como bienes jurídicos que se pretenden proteger a través de la figura delictiva bajo estudio lo conforman, por ejemplo: la vida; la salud física, psicológica, sexual y, el patrimonio de la víctima y de la familia.

#### • **Sujetos**

El delito de violencia doméstica tiene como víctima o sujeto pasivo a cualquier miembro de la familia, no importa el sexo o edad, lo único indispensable es que exista un vínculo de parentesco entre la víctima y el victimario, tal como lo señalan los numerales que van del 1 al 6. Hacemos la aclaración, ya que generalmente se tiende a pensar que cuando hablamos del delito de violencia doméstica nos estamos refiriendo, exclusivamente, a la mujer en su calidad de sujeto pasivo y al hombre como sujeto activo, y nos hemos podido dar cuenta que no es así.

Cabe aclarar que aunque el artículo 200, del código penal panameño, en el cual se describe el delito de violencia doméstica empieza con el pronombre personal indeterminado: "Quien..", mismo que podría dar a entender que lo puede realizar cualquier persona, esto no es así, puesto que esa persona natural o sujeto tiene como característica fundamental ser un miembro de la familia; esto conlleva a señalar que tanto el sujeto activo como el pasivo, en este tipo de figura delictiva, es determinado, por considerarse que solamente se puede dar entre parientes.

El código penal panameño a diferencia del código civil, revoluciona el término de parientes al equiparar

rar a los esposos como tales, por ejemplo, el artículo 91 del código penal panameño, define el término pariente de la siguiente forma: “(...) Para los fines de la ley penal, se consideran parientes cercanos el cónyuge, el compañero o compañera conviviente, las personas dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad e igualmente el parentesco adquirido por adopción.”

- **Clase de delito**

El delito de violencia doméstica o intrafamiliar lo podemos clasificar de la siguiente manera:

- Delito complejo puesto que está conformado por dos acciones ilícitas como lo son: la agresión y el hostigamiento. Además, protege varios bienes jurídicos.
- Es un delito de comisión o de acción.
- Es un delito continuado puesto que mientras dure la situación de violencia se estará transgrediendo el bien jurídico tutelado.
- Es un delito material, puesto que se sanciona el resultado.
- Es de lesión.
- Es unisubjetivo, ya que requiere de un solo sujeto para llevarse a cabo.
- Es unisubsistente porque a través de un solo acto puede consolidarse o materializarse.
- **Circunstancias modificadoras de responsabilidad penal**

Dentro de las circunstancias modificadoras de responsabilidad penal del delito de violencia doméstica o intrafamiliar, podemos mencionar las siguientes:

- **Agravantes:**
  - Cuando la violencia doméstica sea ocasionada por agresión física que ocasione a la víctima una incapacidad superior a los treinta días y que no supere los sesenta días. (art. 201 del código penal)
  - Cuando la lesión sea ocasionada con arma de fuego. (art. 137 del c.p.)
  - Cuando ocurre un homicidio en el cual la víctima era mujer y sostenía una relación de pareja con el victimario o cualquier vínculo de parentesco. (art. 132-A)
  - **Tipicidad subjetiva / Formas de Culpabilidad**
- Este delito solamente contempla la modalidad dolosa en su tipo penal.
- **Situaciones jurídicas derivadas o relaciones con el delito de violencia doméstica**

La violencia doméstica o intrafamiliar, comprobada, constituye una causal de divorcio según los lineamientos del artículo 212, del código de la fami-

lia, de Panamá, mismo que establece lo siguiente: “*Son causales de divorcio: (...) 2. El trato cruel físico o psíquico si con él se hace imposible la paz y el sosiego doméstico; (...)*”

En este mismo orden de ideas consideramos que la legislación penal panameña debe realizar una mejor diferenciación entre el delito de violencia doméstica o intrafamiliar y el delito de maltrato de niño, niña o adolescente tipificado en los artículos que van del 202 al 204 del código penal panameño, ya que este debe establecerse cuando al acción de maltrato se da entre un victimario (el adulto) que no tiene ningún tipo de parentesco con la víctima (el menor de edad), ya que consideramos en lo personal que si este trato cruel o maltrato ocasionado se da dentro de algún grado de parentesco, estaremos ante la presencia del delito de violencia doméstica y no de maltrato a un menor de edad.

- **Derecho Internacional y otras leyes**

Es importante anotar que en el Código Procesal Penal de Panamá, en su Libro Tercero (Procedimiento Penal), Título I (Fase de investigación, específicamente el Capítulo V, se establecen las medidas de protección a víctimas, testigos y colaboradores, en su artículo 333, se establecen las medidas especiales de protección a la víctima de violencia doméstica y otros delitos, siendo una de ellas por ejemplo: ordenarle al presunto agresor que desaloje la casa o habitación que comparte con la víctima mientras dura el proceso, por espacio mínimo de un mes.

- **Delito de Femicidio**

Cuando hablamos del delito de femicidio lo primero que viene a nuestra mente, es establecer un marco conceptual del mismo partiendo de hacer una diferenciación entre la figura del femicidio y el feminicidio. Una vez manifestado esto, diremos que el delito de femicidio consiste en aquel acto criminal o hecho punible, que se materializa a través de una realización de actos idóneos concatenados entre sí, tendientes a transgredir el ordenamiento jurídico penal mediante el privar de la vida a una mujer debido a su género. Es decir, se mata a una mujer por ser mujer solamente; sin existir ninguna otra razón. Esto quiere decir, que no se priva de la vida a la mujer en defensa propia, o por inobservancia del deber de cuidado, o negligencia. Simplemente un sentimiento misógino, incidió en que se llevará a cabo este delito.

Por otra parte, el feminicidio no constituye per se una figura delictiva, ya que el mismo consiste



en el conjunto de acciones promovidas por instituciones públicas (el Estado), instituciones privadas que al promover el estado de indefensión y dejar a la mujer carente de mecanismos jurídico-legales de protección de sus derechos humanos, hacen que esta se constituya en víctima del delito de femicidio. Además, bajo la cobertura del término feminicidio se establecen el grupo de delitos que se cometen en perjuicio de la mujer por su condición de género, llámese violación carnal, estupro, violencia doméstica, acoso laboral, violencia en la atención médica (al momento de parir).

Sin embargo, independientemente de lo expuesto en párrafos anteriores, he de indicar que en la realidad jurídica de la mayoría de los países, los términos femicidio y feminicidio se utilizan indistintamente para señalar que se ha privado de la vida a una mujer por su condición de mujer, es decir, por pertenecer al género femenino.

El vocablo femicidio no es nuevo, ya que fue utilizado por primera vez, por el dramaturgo inglés de apellido Corry, en el año de 1801, al realizar una obra de teatro en la cual hacía una sátira de la vida en Londres. Con posterioridad, toma auge en la década de los 60, debido a un delito del sistema que comete el Estado Dominicano, a través de su Servicio de Inteligencia Militar, en perjuicio de las hermanas Mirabal. Luego, en Bruselas, en el año de 1974, en la organización del denominado Tribunal de Crímenes contra la mujer, la feminista Diana Russell, hace mención de este término públicamente, definiéndolo como *“El asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de las mujeres.”*

La doctrina penal hace una clasificación del delito de femicidio, de la siguiente forma:

- Femicidio íntimo o familiar: cuando entre la mujer y su victimario existía algún grado de parentesco o amistad.
- Femicidio no familiar: cuando la mujer no conocía a su victimario.
- Femicidio sistemático: sobre todo en aquellos casos en que la víctima ha sido abusada sexualmente, torturadas, luego las matan y después, en forma denigrante para la dignidad de la mujer, la arrojan en barrancos, parajes solitarios o lugares públicos.
- Femicidio de conexión: cuando la víctima acudió en la ayuda de otra mujer, contra quien iba dirigida la acción, y, ella o ambas fallecen.
- Femicidio infantil: cuando se priva de la vida a una menor de edad, por haber nacido mujer (niña).

En este mismo orden de ideas consideramos que el surgimiento de instrumentos internacionales como: la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém Do Pará), con su Protocolo de enmienda; y, la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW), siendo todas aprobadas por Panamá y, por ende, forman parte de nuestro Derecho Positivo. Han ejercido presión para que la comunidad internacional crea conciencia de la situación e incluya dentro de sus legislaciones la figura del femicidio.

En cuanto a Panamá, este delito se establece mediante la ley 82 del 24 de octubre de 2013, presente en la Gaceta Oficial # 27,403. Esta ley, entre otras cosas define al femicidio en su artículo 4, de la siguiente manera: *“Causar la muerte a una mujer basada en la pertenencia al sexo femenino, por causa de la discriminación o cualquier otra forma de violencia.”*

En lo referente a las modificaciones que dicha ley le introduce al Código Penal Panameño, se encuentran las siguientes:

- No constituye un eximente de culpabilidad cuando motivados por la costumbre o tradiciones culturales o religiosas se lleven a cabo delitos de violencia contra la mujer.
- Se agrega como pena de carácter principal: el tratamiento terapéutico multidisciplinario.
- En los delitos contra la vida y la integridad personal; violencia doméstica; delitos contra la libertad e integridad sexual; y, delitos contra la trata de personas cuando la víctima sea una mujer; no se aplicará la pena de arresto domiciliario.
- Constituye un delito de homicidio agravado, con punibilidad que oscila entre los veinticinco a treinta años de prisión, cuando:
  - Entre la mujer y su victimario exista relación de parentesco, de noviazgo, amistad, o de intimidad; relación de confianza, docente, laboral, subordinación o superioridad.
  - El hecho se comete en presencia de los hijos.
  - Hubo aprovechamiento, por parte del victimario, de una condición de riesgo o vulnerabilidad física o síquica, con respecto a la mujer.
  - Que debido a ritos grupales o por venganza se ultime a la mujer.
  - Por sentir menosprecio por el cuerpo de la mujer, para mutilarle su cuerpo, para satisfa-

cer instintos de carácter sexual.

- Por exponer el cadáver de la mujer en lugares públicos o privado o simplemente se le privo de su libertad antes de matarla.
- Como medio de encubrir una violación.
- Si la mujer está embarazada.
- Por situaciones de desventaja con respecto a las relaciones de poder.
- Solamente por su condición de mujer.
- Inducir a una mujer a privarse de la vida (suicidarse) debido a que es víctima de maltrato.
- Cuando las lesiones personales se produzcan como consecuencia de violencia doméstica o violencia contra la mujer.
- Cuando se incurra en violencia psicológica debido a amenazas, intimidación, chantajes, acoso, se le obligue a realizar cosas que ella no quiere, sufrir humillaciones, vejaciones.
- El hostigar, acechar o discriminar sexualmente a una persona con la cual se tiene un vínculo laboral, escolar o religioso.
- El agredir física o patrimonialmente a un miembro de la familia.
- Cometer violencia económica contra la mujer, a través de conductas como: no permitirle una total disposición de sus bienes o derechos patrimoniales; afectar su patrimonio mediante firma de documentos; que se le oculten documentos de identificación personal, objetos personales o instrumentos de trabajos que constituyen una forma indispensable de realizar sus actividades económicas (su trabajo o negocio).
- El incumplir con las medidas de protección impuesta por el juez, a favor de la mujer, dentro del proceso penal.

En términos generales, la ley de femicidio introduce modificaciones en cuanto al código penal, en las siguientes figuras delictivas: delitos que atentan contra la vida y la integridad personal (homicidio y lesiones personales); delitos contra la integridad y libertad sexual (acoso sexual); delitos contra el orden jurídico familiar y estado civil (violencia doméstica); delitos contra el patrimonio económico (hurto); delitos contra la administración de justicia (quebrantamiento de medidas de protección y de sanciones).

Por último, en cuanto al Derecho Comparado, podemos indicar que el código penal federal de México, contempla en su Libro II, Título Decimonoveno (Delitos contra la vida y la integridad corporal), en su Capítulo V, la figura del feminicidio, en su único

artículo el 325, que a la letra dice: *“Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: (...) A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa..., el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. En caso que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.... Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.”*

Hemos podido observar, que con relación al código penal federal mexicano, no existe en realidad una diferencia en cuanto a la forma como manejan la figura delictiva, salvo que por ejemplo: se utiliza el término feminicidio, la pena es mayor y la sanción también se extenderá a todo aquel funcionario que interviene en el proceso y perjudica intencionalmente a que se le haga justicia a la víctima, que en este caso es una mujer.

#### • **Violencia de Género**

En cuanto al término violencia de género queremos dejar ampliamente establecido que la misma hace alusión a todo acto que implique cualquier manifestación de violencia (agresión, hostigamiento, malos tratos, discriminación, etc) a una persona humana, en atención al menosprecio por el sexo al cual pertenece. Es decir, la víctima puede ser cualquier ser humano.

En Panamá, la violencia de género como tal no se encuentra tipificada como delito; sin embargo, lo que ella pueda ocasionar en un momento dado sí. Por ejemplo: violación sexual, violencia doméstica, femicidio, servidumbre sexual, tráfico de personas, trata de personas, prostitución forzada, homicidio, violencia doméstica, entre otros.

En el caso del delito de homicidio, ocasionado en perjuicio de una mujer por su género, el artículo 132-A, del código penal panameño, contempla lo siguiente: *“Quien cause la muerte a una mujer, en cualquiera de las siguientes circunstancias, será sancionado con pena de veinticinco a treinta años de prisión: (...) 10. Por cualquier móvil generado por razón de su condición de mujer o en un contexto de*

*relaciones desiguales de poder.”*

De lo antes expuesto, podemos identificar como características de la violencia de género, enfocado a la mujer, lo siguiente:

- Conformar una circunstancia agravante de carácter específico, en el delito de homicidio, cuando la víctima es una mujer.
- Implica que existe una condición de desigualdad de poder.
- Manifiesta desprecio e intencionalidad en el comportamiento por parte del victimario.
- Constituye una transgresión directa al derecho humano de igualdad consagrado en el artículo II, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, del cual Panamá es signatario.

## ASPECTOS DE CARÁCTER PSICOSOCIALES, ECONÓMICOS, POLÍTICOS Y CULTURALES

Los delitos bajo estudio comprenden aspectos de carácter psicológico, sociales, económicos, políticos y culturales, mismo que podemos explicar de la siguiente manera:

A nivel mundial, pero principalmente en los países de América Latina existe un predominio del hombre con respecto a la mujer. Es decir, producto de nuestras raíces indígenas, la mujer siempre ha llevado un papel de sumisión y respeto al hombre de la casa. El hombre es el único que puede y debe impartir las normas en el hogar y determinar qué es lo que puede o no puede hacerse. Esto conlleva a crear patrones culturales, profundamente arraigados en nuestros pueblos y la sociedad panameña no se escapa a esta situación.

La crianza y formación que se da en los hogares latinoamericanos es que el valor de la mujer va en proporción a la presencia masculina en su vida, ya sea a través del esposo, cónyuge, novio, padre, hermano, etc. A la mujer se nos enseña que debemos aprender a ser buenas esposas y madres para que podamos ser bien vistas en la sociedad.

Podemos decir entonces, que producto de la cul-

tura machista de un país, la sociedad impone patrones de conducta que desarrollan complejos de inferioridad que llegan a afectar la autoestima de la mujer y la convierte en víctima de la violencia, sobre todo de la doméstica y la de género.

La mujer que depende económicamente de otra persona, de su pareja sentimental, por ejemplo, no aprendiendo a valerse por sus propios medios, a ser útil desde el punto de vista económico, siempre estará temerosa de no saber qué hacer si pierde ese apoyo económico y ese temor aumenta en la medida en que tenga hijos, ya que siente responsabilidades con estos y, se considera más comprometida a soportar toda clase de vejámenes.

El Estado, en el caso de Panamá, carece de una Política Criminal o Criminológica adecuada, que contemple programas efectivos de prevención a la violencia. Por ejemplo: estableciendo mecanismos legales que protejan la igualdad de condiciones laborales, entre otras cosas.

## CONSIDERACIONES FINALES

- El Estado debe diseñar políticas públicas de protección a los derechos de la mujer en el matrimonio y la sociedad.
- Los medios de comunicación deben tener una participación más activa, a través del diseño y difusión de campañas de concienciación con relación a la tolerancia y respeto de los derechos humanos.
- Se debe educar a la familia en materia de valores éticos, morales y espirituales.
- El Estado deberá contar con un ente que se encargue de fiscalizar la ejecución de las leyes que han sido diseñadas para evitar cualquier tipo de violencia.
- Es responsabilidad de la sociedad entera crear conciencia de la importancia que tiene el denunciar cualquier manifestación de violencia de la cual seamos víctimas directas o que simplemente tenemos conocimiento que se está llevando a cabo.

## BIBLIOGRAFÍA:

- Bogado, Zulema. 2013. “Violencia Familiar”. Colombia.
- Cabanellas de Torres, Guillermo. 2000. “Diccionario Jurídico Elemental”. Argentina.
- Código Penal Panameño
- Código Procesal Penal Panameño
- Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belém Do Pará”.
- Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres “CEDAW”
- Cruz Santos, Manuel. 2010. “Violencia Familiar”. INEGI. México, D.F.
- Ferro Torres, José G. 2011. “Lecciones de Derecho Penal. Parte Especial”. Universidad Externado de Colombia.
- Mariño, Fernando. Feminicidio. 2013. “El Fin de la Impunidad”. Ed. Tirant lo Blanch. España.
- Peramato M., Teresa. 2012. “El femicidio y el feminicidio”. Argentina.
- Russell, Diana. 1986. “El Femicidio”. Estados Unidos de Norteamérica.
- [www.Definición.De.com](http://www.Definición.De.com)
- [www.organojudicial.gob.pa](http://www.organojudicial.gob.pa).
- [www.WordReference.com](http://www.WordReference.com)







**Alonso R. Peña Cabrera Freyre**

Fiscal Superior - Jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional de la Fiscalía de la Nación de Perú

## INTRODUCCIÓN

**H**emos dado patente a la idea, de que la sociedad moderna se ve amenazada por una multiplicidad de riesgos, de peligros para una coexistencia social pacífica, como base fundamental de toda sociedad democrática de Derecho. Estos riesgos van adquiriendo rasgos distintos a los convencionalmente conocidos, ya no necesariamente vienen dotados de cierto revestimiento material, pues toman configuraciones de evidente inmaterialidad.

El avance imparable de la ciencia y la tecnología, muestran como el intercambio y transferencia de información (datos) puede tomar lugar de forma impronta, veloz y de rápida fluidez comunicativa. A decir de Flores Prada (S/A: 43) la digitalización nos permite tratar la información en sentido amplio, comprendiendo en ella los textos, la imagen y el sonido, creándola, almacenándola, modificándola, transmitiéndola y recibiendo a través de canales codificados. Este fenómeno adquiere un particular alcance en el ámbito de la empresa, en donde se ha producido un rápido proceso de informatización, al punto que no hay corporación alguna que en la actualidad pueda organizarse de espaldas a tal tipo de tecnologías (Palomino, 2014:139). Esto es algo que toma viso de realismo, en un marco de informatización de la infor-

mación, donde las bases de datos son evacuadas en ordenadores digitalizados, en sistemas de informático, a fin de hacer un uso fácil y ordenado del mismo; una labor emprendida tanto en el sector público como privado. Y, esto lo decimos, en tanto, la empresa es blanco constante de los delitos informáticos, así Casabona (S/A: 39) al sostener que también las empresas públicas son víctimas de estos ilícitos.

Estamos por tanto, ante un nuevo y fastuoso campo de actuación humana, nos referimos al «ciberespacio»; importa un espacio virtual, en el cual fluyen todos los mecanismos e instrumentos propios de la Informática, mediando una alta tecnología que permite la interacción fluida y masiva de una gran cantidad de personas (cibernautas). Supone un área inmaterial, viabilizando comunicaciones inmediatas entre personas que se encuentran geográficamente a miles de kilómetros de distancia- El ciberespacio está construido fundamentalmente sobre aparatos y técnicas de información; constituye en realidad un instrumento para tratar la información, pero, al menos por el momento y dentro de nuestro vigente ordenamiento penal, no ha hecho nacer valores que no fueran ya objeto de protección. (Flores Prada: 44)

Hace varios años apareció el INTERNET,

como una herramienta de primer orden, en pos de acceder a una vasta red de información (páginas Web, portales informáticos, etc.), que emplean proveedores de bienes y servicios a todo nivel de actuación (nacional e internacional), incidiendo en un flujo significativo de adquisición de tipo de bienes y servicios a través de transferencias electrónicas, mediando el uso de tarjetas de crédito; cuyo empleo, supuestamente se encuentra cubierto por dispositivos electrónicos de seguridad.

A su vez, se instituyen las famosas «Redes Sociales» (Twitter, Facebook, etc.), permitiendo a sus usuarios, colgar una serie de datos, de imágenes (propios de la intimidad - privacy) que son compartidas de forma voluntaria, con sus eventuales accesitarios; importa una suerte de compartimentación entre una pluralidad de personas. Sin duda, esta vía comunicativa, de alcances en realidad portentosos, relativiza de cierta forma la intimidad de las personas, que es devela por sus propios titulares; empero, ello no justifica que terceros accedan a esta información de forma indebida, burlando ciertos mecanismos de seguridad, lo que hace de estas conductas merecedoras y necesitadas de pena, merced a su innegable relevancia jurídico-penal.

Por otro lado, la carencia de controles estrictos y rígidos a ciertas páginas virtuales (de carácter pornográfico o de alto contenido de violencia), define una situación de grave amenaza para las personas más vulnerables, esto es, para los niños y los adolescentes, que al ingresar a estos portales sin mayor vigilia paternal, son presas fáciles de redes de pedófilos, quienes primero se ganan la confianza de estos infantes y así los involucran dolosamente en imágenes y/o materiales de contenido sexual (pornográfico). Esta situación criminológica, es objeto de regulación jurídico-penales, a través de los tipos penales de Pornografía infantil, Turismo Sexual infantil y el llamado Grooming (Art. 183°-B del CP). Si bien no existe aún una medida exacta de la importancia de estas transgresiones sexuales a través de la Web, es probable que su incidencia se haya acentuado con la expansión del uso de computadoras y redes telemáticas, anota Peña Labrin. Sin embargo, debemos resaltar que los patrones de atención han cambiado y los peligros a los que los niños, niñas y adolescentes están expuestos; sin embargo, no han variado, al mismo tiempo, los paradigmas de cuidado de las familias y las escuelas. Este grupo etario se ha tornado vulnerable en su propio hogar Peña Labrin

(2015:153-154). Es de lamentar, que justamente las personas que deberían cautelar que estos infantes no sean víctimas de estos agentes, no ejercen el control que debieran, por desidia o por falta de tiempo; siempre hemos sido firmes en considerar que la verdadera prevención delictiva empieza por casa, en la medida que -por lo general-, el Derecho penal llega cuando la afectación ya tomo lugar.

No puede dejar de mencionarse, las obras intelectuales, los pensamientos, reflexiones y otras creaciones humanas, que si bien son colgadas en el INTERNET, algunas de ellas, al estar protegidas con medidas tecnológicas, impide su copia, reproducción e impresión, significa que no se autorizan dichas acciones. Sin embargo, estos peruanos ingeniosos e inventivos, fabrican una serie de dispositivos electrónicos dirigidos a eludir dicha medidas tecnológicas de seguridad; fue de esta manera, que la Ley N° 29263 de octubre de 2008, incorporó los artículos 220-A al 220-F al CP, en el apartado referido a los «Delitos Intelectuales» (Peña Cabrera Freyre, 2014:37-52).

Ahora bien, es sabido que nuestro país se caracteriza por todo un fastuoso mercado (fábrica) clandestina de producción, elaboración y comercialización de dispositivos electrónicos dirigidos a manipular y eludir las medidas tecnológicas que revisten de seguridad, que emplean una serie de obras intelectuales para no ser burladas y así copiar su contenido con un probable afán lucrativo. Estos son los medios que utiliza el agente para acceder «indebidamente» a base de datos, ordenadores informáticos, sea para copiar la información, para dañarlo o simplemente para mofarse de sus titulares, para enrostrarles lo débil que resultan los mecanismos de seguridad adoptados. En el apartado del «glosario terminológico», la Ley Penal Especial, entiende por «sistema informático»: todo dispositivo aislado o conjunto de dispositivos interconectados o relacionados entre sí, cuya función, o la de alguno de sus elementos, sea el tratamiento automatizado de datos en ejecución de un programa. Estas constituyen las modalidades delictivas, que en principio acogió el legislador con la inclusión del Capítulo X (Los «Delitos Informáticos») al Título V del CP, dando patente normativa a los artículos 207-A, 207-B, 207-C y 207-D.

Lo que al Derecho penal interesa -en todo caso-, es cuando se accede indebidamente a estos ordenadores, pertenecientes a entidades estatales o privadas, contenedoras de información muy sensible, en cuanto a identidades de sus miembros, referencias

personales, número de cuentas bancarias, estados financieros de las sociedades empresariales, etc., que en manos de estos intrusos puede suponer la causación de graves daños económicos y morales; que decir, en entidades de seguridad pública, como agencias policiales y otras, que son accedidas por organizaciones criminales. En este caso el riesgo y las consecuencias a generarse son de magnitud incalculable.

Visto así las cosas, las tipificaciones legales que se contemplaban en los artículos derogados por la Ley N° 30096, parecían ser insuficientes para poder prevenir y combatir (estrategia de política criminal), lo que importa en la actualidad la «Ciberdelincuencia»; aunado ello, a una inclusión normativa en puridad asistemática, al no corresponderse con el interés jurídico penalmente tutelado por el Título V de la codificación penal nacional.

## 1.- LA TRASCENDENCIA INTERNACIONAL DEL DELITO INFORMÁTICO Y EL MARCO DE COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL

Estando a lo anterior, es que era indispensable una reformulación de la política criminal, bajo la descripción de la realidad descrita, donde los medios informáticos y cibernéticos se constituyen en un palanque de especial eficacia para alcanzar una serie de propósitos delictivos, de la más variada especie. En tal entendido, tomando en cuenta que estamos ante una delincuencia que genera efectos lesivos de contenidos cuantitativos y cualitativos significativos y, cuya operatividad trasvasa las fronteras Nacionales en vista de su peculiar naturaleza, es que se le considera como una criminalidad que debe ser afrontada a través de mecanismos de cooperación judicial internacional así como con la suscripción de Tratados y Convenios Internacionales sobre la materia. Es así, que en el marco de la Unión Europea se firma el Convenio de «CYBERCRIME» de Budapest, en cuyas líneas expositiva se señala lo siguiente, como fundamento de política criminal (regional): *“Reconociendo el interés de intensificar la cooperación con los otros Estados parte en el Convenio; Convencidos de la necesidad de llevar a cabo, con prioridad, una política penal común destinada a prevenir la criminalidad en el ciberespacio y, en particular, de hacerlo mediante la adopción de una legislación apropiada y la mejora de la cooperación internacional; Conscientes de los profundos cambios suscitados por el incremento, la convergencia y la*

*mundialización permanente de las redes informáticas; Preocupados por el riesgo de que las redes informáticas y la información electrónica sean utilizadas igualmente para cometer infracciones penales y que las pruebas de dichas infracciones sean almacenadas y transmitidas por medio de esas redes”.*

Se delinean así los elementos para darle la catalogación de «delito internacional», al evidenciarse una operatividad delictiva que desborda los marcos territoriales de las Naciones como la extensibilidad de los efectos lesivos a una serie de espacios. Enfrentar a la ciber-delincuencia mediando las instituciones político criminales convencionales y tradicionales de los ordenamientos jurídicos, es un tal despropósito, al requerirse capacitación especializada de los operadores de persecución penal así como de tecnologías capaces de identificar el *modus operandi* de estos ingeniosos agentes. Así, en la 1era. Jornada TIC sobre CIBERDELINCUENCIA, al indicarse que: *“(....) la globalización del fenómeno, a tenor de la mayor potencia de los sistemas informáticos con mayores prestaciones y su generalizada disponibilidad para cualquier persona consolidándose en una “informática de masas”, y su coincidencia en un nuevo espacio virtual, el ciberespacio, que llega a producir nuevas formas de realidad y en el que “lo real puede convertirse en falso, el original, en copia y el ser, en identidad virtual”, con independencia de un punto concreto del planeta, ha supuesto el configurar el delito informático como más móvil y más internacional, con una gran potencialidad como medio de anonimato e impunidad en las comunicaciones, incluso entre los delincuentes, y su utilización ha venido incluso siendo constatada en las organizaciones criminales”.*

Parafraseando a Flores Prada, diremos que la tarea de individualizar y sistematizar las nuevas conductas no es fácil lo demuestra la falta de una respuesta penal pronta, completa y mínimamente satisfactoria por parte de los ordenamientos jurídico-penales ante el fenómeno de la criminalidad informática. A los problemas de tipificación de conductas nuevas y sumamente técnicas, se añade la extraterritorialidad de la red, el anonimato que generalmente acompaña a los navegantes en Internet y la aceleración vertiginosa de los descubrimientos tecnológicos en la materia (Flores Prada, S/A: 48). No olvidemos que el uso propio de la red informática, de este incommensurable ciber-espacio, las conductas ilícitas pueden fácilmente propiciar estados de lesión en espacios

geográficos de varios Estados, por lo tanto no se puede afrontar esta delincuencia bajo el vetusto principio de territorialidad; el principio de soberanía estatal debe ser relativizado y así configurar un espacio de Cooperación Judicial Internacional, haciendo de este injusto penal uno de alcance «internacional».

Las Disposiciones Séptima y Octava Complementaria Final de la Ley, estipulan al respecto lo siguiente:

*“El Estado peruano realiza acciones conjuntas con otros Estados a fin de poner en marcha acciones y medidas concretas destinadas a combatir el fenómeno de los ataques masivos contra las infraestructuras informáticas y establece los mecanismos de prevención necesarios, incluyendo respuestas coordinadas e intercambio de información y buenas prácticas”.*

*“El Estado peruano promueve la firma y ratificación de convenios multilaterales que garanticen la cooperación mutua con otros Estados para la persecución de los delitos informáticos”.*

El consenso, la colaboración y la buena voluntad de las Naciones es lo que permite delinear estrategias de política criminal internacional, idónea para una eficaz investigación, persecución y sanción de delitos como el Informático.

La política criminal que acoge nuestra lege lata se contrae del primer articulado de la normatividad, al indicarse que: *“La presente Ley tiene por objeto prevenir y sancionar las conductas ilícitas que afectan los sistemas y datos informáticos y otros bienes jurídicos de relevancia penal, cometidas mediante la utilización de tecnologías de la información o de la comunicación, con la finalidad de garantizar la lucha eficaz contra la ciberdelincuencia”.* Si bien se señala al principio que se formula una estrategia preventiva contra las conductas que afectan los sistemas informáticos, finalmente se menciona a la ciber-delincuencia, por lo que advertimos una intención no concretizada a plenitud.

## 2.- ¿LA CREACIÓN DE UN NUEVO BIEN JURÍDICO EN LA LPE DE DELITOS INFORMÁTICOS?

Podemos ser reiterativos, mas consideramos que siempre es importante recordar que el basamento legitimador del Derecho penal en una sociedad democrática, es en definitiva la protección de bienes jurídicos. Y, esto lo decimos, por la conocida propuesta de desviar la teleología del derecho punitivo

a la vigencia de la norma, que por su carácter instrumental y evidentemente sistémico, no guarda coherencia con la visión de la política criminal en nuestra Carta Política que es la salvaguarda de bienes jurídicos fundamentales, sin defecto de reconocer la notable incidencia comunicativa que se ejerce tanto en la conminación penal como en la plasmación de una condena, aplicativa de una norma jurídico-penal.

Dicho esto, la sistematización de la conducta prohibida no es una cuestión de menor rango, en el sentido de que su ubicación clasificadora define marcos interpretativos al operador jurídico, en cuanto a delimitar el ámbito de protección de la norma. Siendo así, identificar el bien jurídico - objeto de tutela punitiva-, es una misión de primer orden en un estadio dogmático que pretende ser meridianamente prolijo.

De forma, que la Ley N° 30096, no se escapa de dicha delimitación, el hecho de que constituya una «Ley Penal Especial», no la sustrae de dicha exigencia doctrinal. Entonces, la denominación empleada nos llevaría a sostener que el bien jurídico protegido es el Orden Informático, los ordenadores y otra base de datos de soporte inmaterial. Sin embargo, con eso decimos muy poco, no sólo por lo reductivo que ello comporta sino también por las propias configuraciones típicas que se han glosado en la Ley, haciendo alusión a otros bienes jurídicos, es decir, afectaciones antijurídicas que son producto del empleo de medios informáticos, esto significa que es el desvalor del comportamiento lo que ha definido para el legislador la denominación como «delito informático», sin interesar que el menoscabo se manifieste en intereses jurídicos distintos al orden informático o cibernético; (...) para que se configure un delito de esta categoría se requiere la utilización de un elemento informático en la comisión de un hecho punible o que el resultado de la acción se traduzca en una vulneración a un sistema informático (Rico, 2013:209); (...) más que de nuevos delitos se trataría de nuevas modalidades para cometer “viejos” ilícitos (Riquert: 2). Se trataría de nuevas formas de ataque antijurídicos, a intereses jurídicos de siempre protegidos por el Derecho penal, pero que por la peculiaridad del medio empleado por el agente, se recurre a una tipificación especial y específica (S/A: 41).

Estamos ante fenómenos conductivos que tienen como patrón denominador la utilización de medios electrónicos u otros dispositivos propios del ciber-espacio, para afectar bienes jurídicos, los cuales pueden ser de la más variada especie; por ello consi-



deramos, que el acento lo ha puesto el legislador no en el desvalor del resultado, sino en el desvalor de la acción. Importante lo que dice Flores Prada (S/A: 44), que con Internet, más instrumentos de ataque, nuevas conductas tipificables pero, al menos por ahora, no puede afirmarse que hayan nacido bienes jurídicos autónomos, distintos de los ya protegidos. Sobre esto Mata (S/A: 52), al referirse al «delito informático», como una categoría criminológica que, al margen de las formas concretas de incriminación en la legislación penal, atiende sobre todo a la fenomenología delictiva en la que aparecen -desde la anterior década- los ordenadores y sus aplicaciones como relevante objeto del delito o como medio de comisión de hechos delictivos.

Ahora bien, puede que lo indicado sea un punto de crítica a la presente Ley, de que no se haya seguido en estricto el criterio del bien jurídico protegido, al momento de sistematizar la conducta prohibida, sin embargo, el estado actual de la cuestión, tal vez amerita una tipificación de tal calibre, por lo que los lineamientos de político criminal plasmados en la presente normativa se encuentran plenamente justificados (Riquert, S/A: 2). Algo semejante advertimos en el Convenio de Budapest, al haberse incluidos ilícito que tienen que ver con bienes jurídicos distintos al orden cibernético y/o informático, v. gr., el fraude informático, los delitos relacionados con la pornografía infantil, etc. Se dice de esta forma, que aceptar que los sistemas informáticos no han creado nuevos bienes jurídicos, no significa que su sea penalmente irrelevante. El derecho penal no regula bienes jurídicos sino conductas de lesión, de las que cabe inferir los bienes jurídicos protegidos y su nivel de protección Flores Prada (S/A: 45). Cómo se indicó, acá, la valoración en la tipificación se centra en el desvalor de la acción, en la forma del ataque y, no en el bien objeto de lesión, sin que esto último no se considere al momento de graduar el marco de punición. A criterio de un sector de la doctrina nacional, se ha dotado de una mayor protección a este tipo de intereses (...) (Palomino, 2014: 140).

Eso sí, no consideramos acertados que se haya procedido a una tipificación simultánea del «Grooming», en dos articulados, en el artículo 183-B del CP y en el artículo 5° de la LPEDI, algo innecesario desde un plano de técnica legislativa. Lo único que distingue ambas modalidades típicas en el medio empleado por el agente, para contactar a la víctima y así involucrarlo en actos de contenido sexual, que

sería el uso de la tecnología de la información o de la comunicación, lo cual no obsta en reconocer que la difusión de imágenes por la virtualidad de las páginas del Internet que aumenta considerablemente el ámbito de lesión del bien jurídico, por lo la reacción penal ha de aumentarse en escala suficiente.

Entonces, los motivos de orden político criminal son los que definen esta particular forma de legislar, lo cual repercute no sólo en el ámbito sustantivo, sino también en la operatividad de la investigación y persecución de estos ilícitos penales, entendiendo la especialidad que implica abordar esta problemática.

En resumidas cuentas, vemos que los delitos informáticos strictu sensu, los podemos encontrar en los artículos 2°, 3° y 4°, mientras que en el resto de articulados podemos decir que los medios informáticos, ordenados y dispositivos electrónicos se constituyen en el medio (modus operandi) que emplea el autor para afectar otros bienes jurídicos.

Habiéndose delineado esta panorámica general, desde un plano de política criminal -nacional e internacional-, es que pasaremos al examen de las diversas familias delictivas que se han glosado en la LPE de «Delitos Informáticos».

### 3.- DELITOS CONTRA DATOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

Los ordenadores, sistemas informáticos, red de computadoras al contener una serie de datos sensibles, de relevancia individual o colectiva, cuentan con claves de acceso, es decir, con dispositivos de seguridad que no deben ser quebrantados por el Estado o los particulares, a menos que intereses jurídicos superiores así lo aconsejen. En efecto, importan todo un abanico de registro digital, que únicamente puede ser accedido por sus titulares, de modo, que la manipulación de sus mecanismos de seguridad significa una intrusión informática, que sí calza perfectamente en el artículo 2° de la Ley -in comento-, implica la configuración de un injusto penal.

Como se indicó, estas figuras delictivas son propiamente aquellas que afectan los «Sistemas Informáticos», tal como se revelaba de los artículos derogados del Código Penal. Esta expresión, se dice, comprende tanto objetos materiales, como actividades, técnicas y protocolos que permite la tecnología digital. Entre los primeros figuran los ordenadores y terminales, sus accesorios, el hardware y el software, y los canales físicos de comunicación y acceso y uso

de ordenadores, terminales y redes, la comunicación entre equipos, la oferta, distribución y consulta de información, la creación, uso y distribución de programas informáticos, el comercio en la Red, etc. (Flores Prada, S/A: 54-55).

Definitivamente, en materia informática el objeto jurídico de protección penal ha de estar desvinculado de una noción material, física o natural, pues lo trascendente es la funcionalidad del sistema informático en sí mismo como un valor independiente del soporte físico en el que se encuentre (Mazuelo, S/A: 48-49).

La semántica empleada por el legislador en los artículos 2º, 3º y 4º, nos indica que autor del delito puede ser cualquier persona, es decir, configura un tipo penal común, que no exige cualidad especial alguna.

El asunto pasa por advertir una conducta encaminada a invadir, -obviamente ilegítimamente-, un sistema informático, sabedor el agente que tiene un titular, y, esto queda patentizado justamente con la medida de seguridad con la cual se encuentra cubierto el ordenador. Es así, que la descripción típica, exige que el autor vulnere unas medidas de seguridad establecidas para impedirlo. Si es que la red no tiene una medida de seguridad, es por tanto de libre acceso, no podrá darse la figura típica -in examen-. El hecho de que la medida de seguridad sea de fácil vulneración, no lo libera al agente de la responsabilidad penal que le asiste, no se está necesariamente ante un genio de la informática. Otro supuesto del injusto de intrusión informática, es cuando el agente, contando con autorización para acceder al sistema informático, excede lo autorizado y así recoge información que no le estaba permitido conocer (acceder). Presupuesto indispensable, es saber con exactitud cuál era el margen de autorización de acceso al sistema informático, de no ser así no podrá establecerse si hubo o no un exceso en la autorización. Si lo que hace es vulnerar una medida de seguridad para acceder a una información no autorizada, se dará la primera modalidad del injusto.

A ciencia cierta no consideramos que exista notable distinción entre lo indebido con lo ilegítimo; el hecho de que la tipificación contenida en el artículo 207º-A no haya hecho alusión a la vulneración de medidas de seguridad, no nos proporciona un entendimiento en contrario. En efecto, cuando en el marco de una investigación fiscal, el representante del Ministerio Público o la policía, accede a un sistema informático, a fin de recabar evidencias

para la averiguación de los hechos presuntamente punibles, esta actuación será debida o si se quiere legítima. Claro, que en el supuesto de una Causa de Justificación, el término legitimidad puede sonar mejor, v. gr., se vulnera las medidas de seguridad del ordenador informático para así saber donde se encuentra la víctima de un secuestro, dando lugar a un Estado de Necesidad Justificante. Si es que el titular del ordenador, da su consentimiento para que se vulnere las medidas de seguridad, el acto es atípico, al ser un interés jurídico de plena disponibilidad, otra cosa sucede, cuando quien da la autorización no es el titular de la información contenida en el soporte informático.

Importante, que la composición típica haya acogido la vulneración de medidas de seguridad, en tanto quien no coloca éstas en su sistema informático no está siendo precavido con su más íntima información, de manera que genera una auto-puesta en peligro que no puede ser objeto de tutela por el Derecho penal (Palomino, 2014: 148-149); no obstante, si quien accede al ordenador, sin vulnerar medidas de seguridad, mas seguidamente daña y/o altera los datos, si responderá penalmente, pero por la conducta descrita en el artículo 3º (in fine).

La expresión deliberadamente, en el tipo subjetivo del injusto, es una valla que el legislador no debió colocar. El dolo es consciencia y voluntad de realización típica, de manera que basta -a nuestro entender-, que el agente sepa con rayana exactitud que está invadiendo una base de datos ajena, para dar por confirmado el tipo penal (Mazuelo, S/A: 50); la deliberación, tiene que ver con un acto expreso del autor, con una intención determinada, propósito de generar un cierto estado de desvalor, como puede ser el ensañamiento hacia la víctima, de generarle un dolo innecesario para causar su muerte. Al constituir un elemento subjetivo del injusto ajeno al dolo, debe graficar algo distinto a este último, situación que no apreciamos en el caso que nos ocupa. En el sentido, de que este elemento no dice nada distinto al dolo, por lo que lo único que va generar es problemas interpretativos, pues algunos pretenderán argumentar que la intrusión fue no intencional o algo parecido; en una propuesta de lege ferenda este elemento debe ser excluido de la composición típica en cuestión.

La materialidad del injusto penal ha de verse cuando el agente logra acceder -todo o en parte- a un sistema informático, sin necesidad de verificar daño

alguno o copia de la base de datos; se diría, por tanto, que estamos ante un delito de mera actividad, que por su particular característica, sí admite la tentativa, cuando el autor no logra vulnerar la medida de seguridad del ordenador informático, por una serie de razones, ajenas a su voluntad.

Finalmente, parece que la tipificación quiere ser más incriminante, en tanto no se exige como lo hacía la legislación anterior, un propósito ulterior, que no tenía que manifestarse en el mundo fenoménico para dar por realizada la acción típica. En pocas palabras, se ha proscrito el hacking blanco, que no es otra cosa que el acceso a un sistema sin que dicha conducta esté orientada a la obtención de secretos, a vulnerar la intimidad de otro o a la producción de daños (Palomino, 2014:146).

## IDEAS CONCLUSIVAS

La criminalidad conforme el paso del tiempo, va adquiriendo nuevas de configuración delictiva, formas significativamente distintas a las tradicionalmente conocidas; el avance de la ciencia y la tecnología, así como permitir el desarrollo del conocimiento humano para fines valiosos para la humanidad, cuando cae en manos de agentes inescrupulosos trae consigo sofisticadas y complejas vías de ataque a bienes jurídicos.

Es así, que los ataques a los datos y sistemas informáticos se convierten en una amenaza latente a las personas y entidades, que tienen a dicho soporte tecnológico como la herramienta indispensable para optimizar sus relaciones sociales así como para mejorar los servicios que las empresas brindan a los usuarios. No se puede prescindir, pues, de los orde-

nadores, de los sistemas informáticos para sistematizar la información y para ofrecer gestiones de toda índole, en el marco de la Sociedad de la Tecnología de la Información y de la Comunicación (TIC).

Estamos entonces, ante un extensible espacio de comunicación virtual, donde los ciber-nautas, navegan en el mismo a fin de entablar comunicaciones con otras personas, que se encuentran a miles de kilómetros de distancia, en tiempos inmediatos, y esto, es lo que se viabiliza a través de las redes sociales. Esta descripción de la informática y del ciber-espacio, conllevan la aparición de conductas altamente lesivas para bienes jurídicos, no necesariamente ligados con los datos y sistemas informáticos, nos referimos al Acoso Sexual Infantil Informático, a los Fraudes Informáticos, al Ciber-Terrorismo, etc.; dando cuenta a la agrupación de conductas, que si bien no se armonizan sobre la idea del bien jurídico, tienen en común un factor de irrenunciable valoración, los medios comisivos, de forma, que es el desvalor de la acción lo que define esta visión de política criminal, plasmada en la Ley de Delitos Informáticos – Ley N° 30096, y no el elemento sistematizador del interés jurídico protegido.

A partir de esta nueva cosmovisión del estado de la cuestión, es que se propone el examen dogmático de estos sofisticados injustos, que por su complejidad operativa y extensión lesiva, han de ser percibidos como crímenes internacionales, de acuerdo al enfoque planteado en el Convenio de Budapest, teniendo en la Cooperación Judicial Internacional un instrumento de especial relevancia, en orden a fortalecer la eficacia preventiva, persecutoria y sancionadora de estas ilicitudes penales.

## BIBLIOGRAFÍA:

- Flores Prada, I. S/A. “Criminalidad Informática. Aspectos sustantivos y procesales”.
- Mata. S/A. “Delincuencia informática y Derecho penal”.
- Mazuelos Coello, J.F. S/A. “Modelos de imputación en el Derecho penal informático”.
- Palomino Ramírez, W. febrero 2014. El Instrusismo y los otros Delitos Informáticos regulados en la Ley N° 30096. En: Gaceta Penal & Procesal Penal, N° 56.
- Peña Cabrera Freyre, A.R. 2014. “Derecho Penal. Parte Especial, Tomo III. Segunda edición”. IDEMSA.
- Peña Cabrera Freyre, A.R. 2015. “Los Delitos Sexuales”. Ideas Solución Editorial, Segunda edición. Lima, Perú.
- Peña Labrin, D.E.; febrero 2015. Delitos informáticos contra la indemnidad y libertades sexuales: Ley 30096. En: Actualidad Penal, N° 08.
- Rico Carrillo, M. enero - junio 2013. Los desafíos del derecho penal frente a los delitos informáticos y otras conductas fraudulentas en los medios de pago electrónicos. IUS. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, México, Año VII - N° 31.
- Riquert, M.A. S/A. “Delitos informáticos”.
- Romeo Casabona, C. S/A. “Poder Informático”.





# ACTIVIDADES COLATERALES

## ENCUENTROS CON PANAMÁ Y BOLIVIA

53

NO. 4 - 2016

LEGALIDAD, DERECHO Y SOCIEDAD

MEMORIAS DEL XIII ENCUENTRO INTERNACIONAL CIENCIAS PENALES 2016

### *Panamá y Cuba en aras de la protección de los menores de edad*



La prevención es esencial en el tratamiento con las niñas y niños

La Procuraduría General de Panamá y la Fiscalía General de la República de Cuba sostuvieron, el 22 de marzo, un fructífero encuentro de trabajo, como parte de las actividades previas al XIII Encuentro Internacional Ciencias Penales 2016 y el Primer Evento Legalidad, Derecho y Sociedad.

Ambas delegaciones intercambiaron experiencias a cerca del sistema de atención y protección a los menores de edad, con especial énfasis en la prevención de la ocurrencia de delitos donde se involucren estos como vícti-

mas o comisores.

En el debate participó la Procuradora General de Panamá Kenia Isolda Porcell, al frente de la delegación panameña y por la parte cubana Carlos Raúl Concepción Rangel, Vicefiscal General de la FGR, de conjunto con Raquel Rodríguez Fraga, Fiscal Jefa de la Dirección de Protección de los Derechos Ciudadanos y especialistas de la Dirección de Relaciones Internacionales y Cooperación Jurídica de este Órgano.

En el caso de Cuba ya la Constitución vigente desde 1976,

anterior a la Convención de los Derechos del Niño, regula la efectiva protección de la niñez y su desarrollo integral. Además, cuenta con un sistema de prevención y atención social, que participa en la elaboración de la política al respecto y controla su ejecución. El mismo se encuentra organizado desde el nivel nacional hasta las circunscripciones, por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en virtud del Decreto Ley 286 de 2007.

La Fiscalía General desempeña un papel primordial en la protección y cumplimiento de

los derechos de las niñas, niños y adolescente, pues su Ley dispuso entre las funciones de los fiscales, representar y defender a los menores que por cualquier causa, queden en situación de desamparo filial o ausencia de representante legal, hasta que se les provea de tutores, representantes o encargados del cuidado de su persona y de la defensa de sus bienes y derechos.

El tratamiento a los menores de edad que cometen hechos que la ley tipifica como delitos se enfoca en su educación, en el que influye la actuación de la Fiscalía. El Vicefiscal General mostró la experiencia cubana al respecto, donde se le da gran preponderancia a la prevención, con el fin de garantizar que no se incurra en delitos.

Por ello, la Procuradora panameña manifestó su interés por realizar cambios en el Ministerio Público de su nación, en aras de dirigirlo a la prevención de

la comisión de delitos, particularmente por menores de edad, por lo tanto, esta constituía una oportunidad para aprender las buenas prácticas instauradas en Cuba y su realidad.

Además, refirió que el intercambio sobre las prácticas preventivas entre ambas naciones es fundamental, principalmente

por la situación actual en Panamá donde ha aumentado el número de menores de edad que se asocian con pandillas. Se apreció un marcado interés por parte de la delegación panameña por instaurar un sistema preventivo, donde la esencia sea la educación y no el castigo.



### *Fructífero intercambio entre Bolivia y Cuba*

Representantes de las fiscalías generales de Bolivia y Cuba debatieron, en la tarde del 22 de marzo, acerca del procesamiento penal, el enfrentamiento a la corrupción y el sistema de gestión informática para agilizar el trabajo. Este intercambio es una de las actividades previas al XIII Encuentro Internacional Ciencias Penales 2016 y el Primer Evento Legalidad, Derecho y Sociedad.

El Vicefiscal General de la Fiscalía General de la República de Cuba (FGR), Carlos Raúl Concepción Rangel, y la Fiscal



Jefa de la Dirección de Procesos Penales de dicho Órgano, Alina Montesinos Li, se refirieron a la importancia de lograr la celeridad en los términos de procesamiento y la calidad del mismo, sin violar ningún derecho del debido proceso, un elemento esencial para la Fiscalía.

Precisamente, el intercambio se enfocó en lograr la efectividad del proceso penal por ambos Órganos. La delegación cubana

refirió que en el éxito logrado en la reducción de los términos de procesamiento y en el enfrentamiento a los delitos ha influido la estructura de la Fiscalía a todos los niveles, la vinculación con otras instituciones y la participación personal de los fiscales en las diligencias e investigaciones.

La delegación boliviana manifestó que la integración de las especialidades es la materialización efectiva de la protección

de los derechos ciudadanos.

Mientras, Javier Alfonso Valdés, segundo jefe de la Dirección de Informática y Comunicaciones de la FGR, se refirió a los sistemas de trabajo creados para facilitar el cumplimiento de las funciones fiscales y el acercamiento a los ciudadanos, a partir de la puesta en funcionamiento de la Línea Única telefónica y un portal web interactivo.

## FIRMAS DE CONVENIOS CON CHINA Y NICARAGUA

*Cuba y China fortalecen lazos de cooperación.*



El programa firmado contribuirá a la formación de los profesionales

La Fiscalía General de la República de Cuba y la Fiscalía Popular Suprema de la República Popular China firmaron, en la tarde del 23 de marzo, un programa de cooperación bilateral, que permitirá fortalecer los históricos lazos de amistad existentes entre ambas naciones. Por la parte cubana rubricó Darío Delgado Cura, Fiscal General de la República y por China, Jiang Jianchu, Vicefiscal

General de esta nación.

El programa promoverá el intercambio de experiencias y conocimientos, a partir de la realización de visitas, cursos, seminarios, y otras formas que incluyen prestar asistencia jurídica mutua, el intercambio de personal profesional para su formación y la ejecución de investigaciones.

De igual forma, fomentará la amistad mutua y la labor fiscal, de

acuerdo a las legislaciones de sus respectivos países, bajo los principios del Derecho Internacional, y sobre la base de la igualdad, la confianza y el trabajo conjunto.

Este convenio es un reconocimiento a la importancia de fortalecer la cooperación internacional en el campo de la lucha contra los delitos, sobre la base del acuerdo de asistencia jurídica firmado por los dos países en el 2015.





**D**arío Delgado Cura, Fiscal General de la República de Cuba y su homóloga de Nicaragua, Ana Julia Guido Ochoa, firmaron un Programa de Cooperación Bilateral entre ambas naciones, el 24 de marzo, como parte de Ciencias Penales 2016.

Este acuerdo permitirá fortalecer los históricos lazos de amistad existentes entre estos países. Su programa fomentará el intercambio de experiencias y conocimientos, la asistencia jurídica mutua y la formación de personal profesional, lo que impulsará la labor fiscal.

El 30 de julio de 2015, ambos representantes rubricaron un acuerdo, que sienta las bases de este programa.

Guido Ochoa señaló que es un orgullo firmar el convenio con un pueblo amigo, “venir a Cuba es renovar voto, es renovarme como revolucionaria, es renovar compromiso y la fuerza para continuar nuestro trabajo.”

Respecto a la firma del programa afirmó: “Veremos la capa-



Firma de Programa de Cooperación Bilateral entre ambas naciones

citación, es para nosotros de mucho interés ver el tema de la oralidad, que ustedes tienen aquí en Cuba una gran experiencia de muchísimos años y nosotros en la oralidad apenas tenemos 15 años de haber iniciado el proceso acusatorio, y aquí ya tiene más de 100 años, así que tenemos mucho

que aprender.”

Los titulares de ambas fiscalías generales durante el encuentro que sostuvieron, previo a la firma del convenio, debatieron acerca de la situación de los pueblos de América Latina, la estructura de sus respectivos órganos, la composición profesional del personal y la



importancia de la heterogeneidad de especialidades para el eficaz cumplimiento de las funciones.

De igual forma, intercambiaron sobre el papel que desempeñan las mujeres en sus ministerios públicos, que en el caso de Cuba representan el 78 por ciento y en el de Nicaragua el 68.

La Fiscal General de Nicaragua manifestó que en Cuba se vela porque se cumplan los derechos de todos los ciudadanos y cree que están trabajando fuertemente por lograr esos objetivos, precisamente la Fiscalía General es garante en la protección de los derechos ciudadanos.



Fiscales generales debaten sobre asuntos internos de sus fiscalías y cooperación mutua



# CUBA DIALOGA CON LAS FISCALÍAS Y MINISTERIOS PÚBLICOS ASISTENTES A CIENCIAS PENALES



**D**urante el Evento Ciencias Penales 2016, el Fiscal General de la República de Cuba, sostuvo encuentros bilaterales con fiscales y procuradores generales, vicefiscales generales y funcionarios de Venezuela, Ecuador, Vietnam, Nicaragua, Portugal, Panamá, Argentina, Angola, Rusia, Kazajstán y España, así como con el Presidente del Comité de Investigaciones de la Federación de Rusia.

En todos, se intercambió sobre el cumplimiento de los convenios y programas de actividades firmados con anterioridad con esas fiscalías, y se evaluaron otras importantes temáticas para el funcionamiento de sus instituciones.

Constituyeron intereses comunes para todos los participantes, la preparación y superación profesional de los fiscales y otros especialistas, la organización, pla-



nificación y control del trabajo. También el desarrollo de seminarios e intercambios de experiencias en materia del enfrentamiento al delito transnacional, la protección a los menores de edad, la atención integral a los ciudadanos, los sistemas de información y análisis para la toma de decisiones, el uso de las tecnologías de la informática y las comunicaciones, así como la necesidad de dinamizar la asistencia jurídica internacional, entre otros.

En el intercambio con la Dra. Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de Venezuela, se evaluaron los vínculos bilaterales entre ambos órganos, y la colaboración en temáticas de interés mutuo que contribuyan a su perfeccionamiento.

En el caso de Ecuador, se intercambió con especialistas de su Fiscalía General, acerca de las actividades conjuntas desarrolladas para enfrentar el tráfico de drogas y de personas, a partir del convenio





firmado entre ambas instituciones.

Mientras, con el Dr. Joao Maria Moreira de Sousa, Procurador General de Angola, se concretaron acciones de preparación para sus respectivos profesionales, como parte del convenio de cooperación rubricado.

De igual forma, el Fiscal General de Cuba sostuvo encuentros con Joana Marques Vidal, Procuradora General de Portugal; Kenia Isolda Porcell, Procuradora General del Estado de Panamá y el Primer Vicefiscal General de la República de Kazajstán.

La Dra. Alejandra Gils Carbó, Procuradora General de la Nación de la República de Argentina, durante su intercambio con el máximo representante de la Fiscalía cubana, explicó la situación que presenta su institución, en cuanto a su estructura orgánica, y solicitó apoyo de los fiscales generales de Iberoamérica al trabajo de la misma.

Este evento fue propicio para el diálogo con Alexander Ivanovich Bastrykin, Presidente del Comité de Investigaciones de la Federación de Rusia, en el cual se abordaron temas asociados al comportamiento del delito transnacional y las características de su enfrentamiento, así como la necesidad de concretar acciones conjuntas para la preparación de sus especialistas.

También se sostuvieron conversaciones con Susan Lustig, Directora Administrativa de la Alianza Estatal de Fiscales Generales de los Estados Occidentales de los EE.UU y Albertico Guinto Sierra, Exprocurador General del Estado de Guerrero en México, los cuales mostraron interés por las acciones de preparación de los profesionales y otros temas afines.





# REPRESENTANTES DE LA AIAMP INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS

**C**iencias Penales 2016 permitió que países miembros de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) presentes en el evento, se reunieran para evaluar temas de interés común para la asociación.

Participaron los representantes de España, México, Argentina, Perú, Portugal, Panamá y Cuba, en el caso de los tres últimos, sus Fiscales Generales son vicepresidentes para las regiones de Europa, Centroamérica y Norteamérica y el Caribe, respectivamente.

Los asistentes dialogaron acerca de la necesidad de la integración y comunicación permanente entre sus ministerios públicos, para abordar temas de interés común y encontrar soluciones que sean para el bien de los pueblos.

En la ocasión, la Procuradora General de Panamá, Kenia Isolda Porcell, convocó a que los estados miembros compartan sus criterios, emprendan acciones concretas, encaminadas a la proactividad y busquen los puntos comunes para la capacitación.

En tanto, Joana Marques Vidal, Procuradora General de Portugal, enfatizó en la necesidad de dinamizar la organización e instó a promover verdaderas redes de comunicación que sean efectivas y planteen propuestas concre-



tas entre sus miembros. Además, sugirió realizar encuentros técnicos entre las reuniones de la AIAMP, de igual forma, explicó algunas ideas para debatir en la próxima reunión de la asociación, que sesionará en el mes de octubre en Portugal.

La Dra. Alejandra Gils Carbó, Procuradora General de Argentina, convocó a efectuar una reunión en su país, a fin de tratar temas relacionados con la protección a los ciudadanos y el papel de los ministerios públicos en este asunto, lo cual contribuirá al fortalecimiento de su institución como miembro de la AIAMP y en

el contexto de su nación.

Mientras, el Fiscal General de la República de Cuba precisó que en la próxima reunión de la AIAMP, a desarrollarse en Portugal, la organización debe evaluar su funcionamiento interno, dinamización y cómo lograr mayor integración y proactividad entre sus miembros, para incrementar la eficacia de los ministerios públicos en el enfrentamiento al delito transnacional y el mejoramiento de sus funciones como servidores públicos. El encuentro se desarrolló en un ambiente de respeto y consenso en las propuestas abordadas.

# RELATORÍA

## XIII ENCUENTRO INTENCIONAL CIENCIAS PENALES 2016 Y PRIMER EVENTO LEGALIDAD, DERECHO Y SOCIEDAD

### *Distinguidos Invitados Queridos Delegados*

**H**a concluido el XIII Encuentro Intencional Ciencias Penales 2016 y I Evento Legalidad, Derecho y Sociedad que sesionó en el Hotel Meliá “Marina Varadero” de la provincia de Matanzas, evento que contó con la participación de más de 300 delegados entre los que se encuentran 9 Fiscales y Procuradores Generales, Vicefiscales Generales, estudiantes de pregrado y posgrado de importantes universidades, junto a destacados profesionales que asistieron en representación de Angola, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, China, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, México, Kazajstán, Mozambique, Nicaragua, Panamá, Perú, Portugal, Rusia, Vietnam, el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la prevención del delito y tratamiento al delincuente, la Facultad de Derecho de la Universidad de la Habana, el Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba, el Ministerio de Justicia de Cuba, la Unión Nacional de Juristas de Cuba, el Ministerio del Interior de Cuba, la Asociación Nacional de Economistas de Cuba y el Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba.

La apertura del evento estuvo a cargo del Fiscal General de la República de Cuba Darío Delgado Cura, quien se refirió a los problemas esenciales del enfrentamiento al delito, y durante la sesión inaugural contamos con las intervenciones especiales de la Dra. Luisa Ortega Díaz Fiscal General del Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela, el Dr. Galo Chiriboga Zambrano Fiscal General de Ecuador, el Dr. Eduardo López

Betancourt catedrático de derecho penal de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Sra. Susan Lustig Directora Administrativa de la Alianza Estatal de Procuradores Generales de Justicia de los Estados Occidentales de EUA.

Las sesiones de trabajo se caracterizaron por 27 intervenciones especiales, 6 paneles, 14 ponencias y una mesa redonda a cargo de prestigiosas personalidades del derecho, que motivaron el interés de los participantes hacia los temas discutidos interviniendo en estas actividades los delegados que se interesaron en ello.

Se expresaron opiniones y vivencias en torno a las ciencias penales, la criminología y victimología, abordándose por fiscales, jueces, abogados, asesores, profesores y estudiantes de derecho, aspectos de interés general relacionados con los temas propuestos durante el programa científico del evento.

Los delegados y demás participantes intercambiaron conocimientos, criterios y experiencias sobre importantes temas relacionados con la actividad de los órganos de la fiscalía en la esfera del derecho internacional, la respuesta penal a la delincuencia económica, reflexiones sobre el modelo cubano, la incapacidad, discapacidad e intervención de la fiscalía, la prohibición de la reformatio in peius en el juicio de reenvío, la solicitud de los peritajes especiales por parte del instructor penal en los delitos relacionados con droga, la cadena de custodia de la prueba en el ordenamiento jurídico cubano, en el derecho comparado y la prueba ilícita.

Constituyeron temas de interés los derechos y garantías de los menores de edad en Cuba, las características de las familias de niños, niñas y adolescentes comisores de hechos que la ley tipifica como delitos y su enfrentamiento investigativo, la protección integral a niñas, niños, adolescentes y menores de edad internos en las escuelas de formación integral.

El papel del fiscal en la protección a las personas con discapacidad y el adulto mayor fue evaluado como un reto para la Fiscalía General de la República de Cuba, conjuntamente con la violencia intrafamiliar y de género en la sociedad cubana actual.

De gran interés resultó el análisis de la corrupción y su expresión en el comercio exterior y los aspectos teórico-prácticos para su enfrentamiento en Cuba, el tránsito de la corrupción administrativa a la delincuencia económica, las consecuencias de la actualización del modelo económico cubano en el derecho penal, los mecanismos para evadir el fisco, la criminalidad internacional en el lavado de dinero y su regulación en la norma sustantiva cubana, el crimen económico transnacional y las competencias orientadas al principio de la legalidad.

Fue valorado el papel del fiscal en la detención, las garantías democráticas en tiempos de cambios, la legalidad y la culpabilidad, y cómo contrarrestar la manipulación del mercado y mal uso de la información.

El derecho penal frente a la corrupción pública y privada fue abordado conjuntamente con el desafío de la apertura de las relaciones internacionales, la significación de la ética y valores morales, el control interno, la contabilidad y los costos, la auditoría y las finanzas en la lucha contra el delito.

La participación ciudadana en la administración de justicia penal, las normas del debido proceso, el rol del juez dentro del sistema de administración de justicia, y la jurisprudencia constitucional en el ordenamiento jurídico motivaron igualmente el interés de los presentes.

Fue tratada la necesidad de un derecho penal de última ratio, la encrucijada entre las garantías penales y el expansionismo acelerado, sus realidades y alternativas, y la conciliación como método alternativo de prevención y solución de delitos.

La democracia y los derechos humanos, el con-

trol de la legalidad como garantía de la seguridad jurídica de la ciudadanía, la seguridad ciudadana en relación con los deberes y derechos ciudadanos, el tráfico ilegal de menores, órganos y explotación sexual, el cumplimiento de las funciones fiscales en la lucha contra los daños criminales a los recursos ambientales, la ciberdelincuencia, análisis dogmático y política criminal desde la cooperación judicial internacional y sus avances en la lucha contra la corrupción, centraron parte de los debates.

La Fiscal Jefa de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República de Cuba realizó una intervención especial sobre la política penal para el enfrentamiento al delito en Cuba.

El análisis sobre el nuevo escenario de las relaciones Cuba-EEUU y sus retos en el orden jurídico estuvo a cargo del Dr. Rodolfo Dávalos Fernández, profesor titular de derecho internacional de la facultad de derecho de la U.H, correspondiendo las reformas y contrarreformas en lo sustantivo y lo procesal a la Dra. Mayda Goite Pierre, profesora titular de derecho penal y decana de esa propia facultad.

Durante el encuentro los representantes de los Ministerios Públicos o Fiscalías Generales de Iberoamérica pertenecientes a la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos acordaron reunirse en Argentina en el mes de junio del año en curso para abordar temas de actualidad y trascendencia para nuestros pueblos como la protección de los derechos ciudadanos, especialmente niños, niñas y mujeres, y así proponérselo al presidente de esta organización.

Invitados y delegados al XIII Encuentro Intencional Ciencias Penales 2016, las intensas jornadas de trabajo que hoy concluimos constituyeron una oportunidad idónea para estrechar vínculos científicos y humanos e intercambiar experiencias encaminadas a perfeccionar nuestra actividad profesional, firmándose en el marco de este evento programas de cooperación bilateral entre la Fiscalía General de la República de Cuba y las Fiscalías Generales de China y Nicaragua, encaminándose otras con países hermanos, erigiéndose esta clausura en tribuna para convocarlos a la XIV edición de este congreso y II Evento Legalidad, Derecho y Sociedad a celebrarse en La Habana en el año 2018.

# CONVOCATORIA

## XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL CIENCIAS PENALES 2018 Y SEGUNDO EVENTO LEGALIDAD, DERECHO Y SOCIEDAD

**L**a Fiscalía General de la República de Cuba convoca al XIV Encuentro Internacional Ciencias Penales 2018 y II Evento Legalidad, Derecho y Sociedad, que tendrá lugar en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, en el mes de marzo de 2018.

El Encuentro se realizará con el auspicio del Tribunal Supremo Popular, el Ministerio de Justicia, la Unión de Juristas de Cuba, la Organización de Bufetes Colectivos, la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana y la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba.

El objetivo fundamental es propiciar el intercambio de experiencias entre profesionales de diferentes países, que contri-

buya a la solución de las disímiles problemáticas que se presentan en el quehacer jurídico, relacionadas con el Derecho Penal a escala internacional y otras ramas del Derecho que impactan en el desarrollo de la sociedad.

El evento va dirigido fundamentalmente a fiscales, procuradores, abogados, jueces, policías, penitenciaristas, criminalistas, criminólogos, victimólogos, médicos legales, psiquiatras forenses, funcionarios que atienden menores víctimas y con trastornos de conducta, psicólogos, sociólogos, contralores, auditores, economistas, asesores jurídicos, profesores y estudiantes universitarios, entre otros especialistas interesados en la materia.



## Principales ejes temáticos

- Prevención y enfrentamiento al tráfico de drogas y migrantes.
- Delitos económicos y funcionariales.
- Delincuencia transnacional y el ciber delito.
- Terrorismo.
- Lavado de activos.
- Crimen ambiental.
- Tráfico Ilegal de Menores y explotación sexual.
- La ejecución de la pena en las personas privadas de libertad.
- La persona jurídica como sujeto del Derecho Penal. Retos actuales y futuros.
- El Estado, la Sociedad y el Derecho en la lucha contra la Corrupción.
- El fortalecimiento del papel de control del Estado como garantía para mejorar la gestión pública, prevenir y aminorar las manifestaciones de Corrupción.
- Tratamiento legislativo de la lucha contra la Corrupción.
- Desarrollo contemporáneo del Derecho en cuanto al enfrentamiento a la Corrupción.
- El Ministerio Público y el Sistema Judicial en el enfrentamiento a la Corrupción.
- Organismos internacionales y las relaciones intergubernamentales en la lucha contra la Corrupción.
- Protección y atención a la violencia en el seno de la familia.
- Delitos relacionados con los niños y las niñas.
- Explotación laboral del menor.
- Relaciones paterno filiales y función tutiva del Estado.
- Tutela Penológica de niños y niñas.
- Leyes Migratorias y Minoridad.
- El control de la legalidad como garantía de la seguridad jurídica de la ciudadanía.

### Para mayor información comunicarse con:

#### **MSc. Patricia María Rizo Cabrera**

Coordinadora Comité Organizador

Teléfono: (537) 206- 61-22

E-mail: relaciones@fgr.cu

#### **MSc. Hortensia Bonachea Rodríguez**

Coordinadora Comité Organizador

Teléfono: (537) 7212 56-14

E-mail: hortensia@fgr.cu

#### **Lic. Migdalia Luna Cisneros**

OPC. Palacio de Convenciones de la Habana

Teléfono: 537 208 6176.

E-mail: Migdalia@palco.cu



# PUEDES ROMPER EL CICLO:

¡NO SEAS VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA!

*Por: Jessica Rivero Rodríguez*

La violencia contra la mujer es todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño. Existen diversas manifestaciones, entre ellas la física, sexual, psicológica, económica y social, que se expresan en

ámbitos de la vida pública, privada, social y política.

Las amenazas de tales actos también constituyen una expresión de violencia, así como la coacción, discriminación, menosprecio, acoso, manipulación, maltrato, aisla-

miento de amigos y familiares, la privación de sus derechos y libertad, entre otras, que pueden desencadenar incluso en el asesinato.

Para las mujeres, la violencia de pareja y la sexual pueden tener disímiles consecuencias físicas, como embarazos no deseados, problemas ginecológicos e infecciones de transmisión sexual. Su manifestación durante el embarazo también aumenta la probabilidad de aborto involuntario, muerte fetal, parto prematuro y bebés con bajo peso al nacer. En el plano psicológico y emocional puede causar heridas difíciles de curar, para lo que requerirán ayuda profesional y el apoyo de familiares y amigos.

La violencia contra la mujer incide en toda la familia, especialmente en los hijos e hijas, que pueden ser víctimas directas o indirectas de estas mani-



festaciones, y por lo tanto, también requieren tratamiento.

El maltrato familiar o contra la mujer es un ciclo que cuenta con tres etapas, la primera de ellas es la acumulación de tensión por parte del victimario; luego, la agresión, donde la tensión se libera a través de manifestaciones violentas, y por último, la luna de miel, período de aparente tranquilidad donde el agresor se disculpa y asegura que no volverá a ocurrir.

Tras esta última etapa el ciclo comienza nuevamente, pero es posible romperlo, acudiendo a las instituciones y organizaciones con capacidad y sensibilidad para enfrentar la violencia contra las mujeres, denunciando estos actos, pues solo un mínimo de ellos son denunciados. Además, contribuye a este propósito el apoyo de familiares, amistades y redes comunitarias, así como el reconocimiento por parte de la víctima de la situación en que se encuentra.

La violencia contra la mujer es a menudo consecuencia de la discriminación que sufren las mujeres en diversos escenarios y por razones de género, dichas desigualdades tienen reflejo en las leyes, las cuales a veces no cuentan con todos los elementos para protegerlas.

En Cuba el Código Penal y las leyes incluyen la protección de las mujeres, mediante la tipificación de delitos que se pueden derivar de la violencia contra estas, tales como: el Homicidio, Asesinato, Lesiones, Amenazas, Coacción, Violación, Proxenetismo y trata de personas.

Desde el triunfo de la Revolución, en Cuba se trabaja para eliminar cualquier manifestación de desigualdad, discri-



minación y de la violencia contra la mujer, u otros sectores. Para ello, se ha establecido una política de “Tolerancia Cero”, que se materializa mediante acciones y medidas encaminadas a elevar la prevención, fortalecer el enfrentamiento, sancionar severamente a los autores de estos actos y brindar protección a las víctimas.

Nuestro país es parte de los diversos instrumentos jurídicos internacionales suscritos en la materia, por lo que ha incrementado la colaboración internacional como Estado Parte de los mismos.

Diversas instituciones y organizaciones cubanas contribuyen a la eliminación de estas manifestaciones de violencia y la instauración de la igualdad de derechos y condiciones a mujeres y hombres.

La Federación de Mujeres Cubanas (FMC) es una organización de masas, surgida el 23 de agosto de 1960 por voluntad de las mujeres cubanas, a quienes representa como afiliadas. La misma, desarrolla acciones de prevención y divulgación de los derechos de las mujeres y temas asociados, por lo que es estandarte en la lucha contra la violencia de género o discriminación de cualquier tipo contra la mujer.

Para garantizar esta labor, la FMC cuenta con las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia, el Centro de Estudios de la Mujer, las Cátedras de la Mujer y otras instancias que realizan acciones en este sentido, entre ellas la preparación en temas de violencia femenina.

A este propósito también contribuye la Fiscalía General, que el 23 de abril de este año firmó un convenio de colaboración con esta organización, lo que permitirá que ambas instituciones perfeccionen su labor en la prevención, atención y divulgación de los temas inherentes a los derechos de la mujer y su protección legal.

Ante hechos de violencia contra la mujer, niñas y niños, las personas pueden buscar ayuda u orientación en las organizaciones de la FMC, que se encuentran en cada municipio del país; de igual forma, se pueden dirigir a las oficinas de Atención a los Ciudadanos que se encuentran en cada una de las fiscalías municipales y provinciales del territorio nacional, y en la Fiscalía General.

Este Órgano ha establecido diversas vías para la protección y contacto con los ciudadanos, a lo que contribuye la puesta en funcionamiento de un Portal Web interactivo, que mediante su sección El Ciudadano, las personas pueden enviar a la Fiscalía

sus quejas, denuncias y reclamaciones.

Además, ha puesto a su servicio la Línea Única telefónica, que tras la firma del convenio con la FMC, se encuentra a disposición de las mujeres víctimas de violencia u otra manifestación de discriminación, para garantizar la protección de sus derechos.

Las mujeres, al sufrir cualquier acto de violencia, también pueden acudir al médico de la familia o área de salud más cercana, establecidas en todo el país, así como a las comisiones municipales de educación sexual o el servicio de orientación y terapia sexual, los centros comunitarios de salud mental y órganos de la Policía Nacional Revolucionaria, donde recibirán la atención necesaria.

Nada justifica la violencia, de ningún tipo, ni contra cualquier persona o género, existen instituciones para garantizar el apoyo a los que han sido víctimas de estos actos. La equidad e igualdad social y de género contribuyen al cese de este lamentable flagelo social, cultivémoslas. La denuncia de los hechos de violencia también favorece su detención.





# SABÍAS QUÉ...

**E**n 1989 comienzan a celebrarse eventos internacionales organizados por la Fiscalía General de la República, teniendo lugar el VII Congreso de Criminólogos del campo socialista, primer evento internacional que se llevó a cabo del 22 al 24 de noviembre de ese año, que tuvo como antecedentes organizativos los cuatro seminarios sobre Lenin y Legalidad Socialista, realizados en el período 1976-1979, con la participación de asesores soviéticos en calidad de conferencistas y representantes de las direcciones y asesores

que en las ediciones de este evento de 1994-1996 participaron más de seiscientos delegados, de ellos 400 y 387 especialistas extranjeros respectivamente, de más de treinta países.

Este evento, tradicional por su alcance y contenido, es una reunión de profesionales y técnicos interesados en la materia penal para intercambiar experiencias sobre el desarrollo de las distintas disciplinas que lo integran.

En estos encuentros han participado destacados especialistas de diversas latitudes.

La actualidad de las temáticas ha convertido a este foro en uno de los cónclaves científicos de mayor prestigio internacional en Iberoamérica.

La posibilidad de realizar este evento internacional en un marco tan apropiado permite además, que especialistas e investigadores estrechen vínculos de colaboración. Igualmente, encuentran la oportunidad de propiciar la solución de los problemas relacionados con la materia en sus respectivos países.

Otros eventos organizados por la Fiscalía han sido los encuentros internacionales sobre Protección Jurídica del Medio Ambiente, de los Derechos de la Familia y el Menor, de los Derechos Ciudadanos, así como los Encuentros Internacionales sobre la Sociedad y sus Retos frente a la corrupción. Con menor grado de participación, pero con igual importancia por su alcance y contenido, fueron los eventos de Procuración de Justicia, Derecho y Sociedad, de Protección Jurídica de la Actividad Mercantil y sobre El Derecho en el Caribe.



X Encuentro Internacional Ciencias Penales 2010

rías jurídicas de la mayoría de los organismos e instituciones del Estado, así como de las organizaciones sociales del país.

Entre los principales cónclaves científicos desarrollados por la Fiscalía merecen destacarse los encuentros internacionales de Ciencias Penales. Estos eventos, organizados desde 1992 cada dos años de forma ininterrumpida, han llegado a ser, por la calidad y actualidad de los temas debatidos, el número de participantes nacionales y extranjeros, el acontecimiento de superación fiscal más importante desarrollado por la Fiscalía hasta entonces. Basta señalar

# GLOSARIO DE TÉRMINOS JURÍDICOS

## CONVENIO SOBRE CIBERCRIMINALIDAD

El Convenio sobre ciberdelincuencia, también conocido como el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia o simplemente como Convenio Budapest, es el primer tratado internacional que busca hacer frente a los delitos informáticos y los delitos en Internet mediante la armonización de leyes nacionales, la mejora de las técnicas de investigación y el aumento de la cooperación entre las naciones. Fue elaborado por el Consejo de Europa en Estrasburgo, con la participación activa de los estados observadores de Canadá, Japón y China.

El 1 de marzo de 2006, el Protocolo Adicional a la Convención sobre Cibercrimen entró en vigor. La ratificación de este Protocolo Adicional por los estados es necesario, pues permite penalizar la difusión de propaganda racista y xenófoba a través de los sistemas informáticos, así como de las amenazas e insultos que tengan este carácter.

## DE LEGE FERENDA

Es una locución latina que significa “para una futura reforma de la ley” o “con motivo de proponer una ley”. En consecuencia, se trata de una recomendación que debe ser tenida en cuenta como conveniente en una próxima enmienda legislativa.

## STRICTO SENSU

Es una expresión latina que significa “en sentido estricto” o “en sentido restringido”, que también puede ser leída *sensu stricto*.

Esta frase se emplea cuando para una palabra, nombre o expresión son posibles dos interpretaciones y una de ellas abarca a la otra, por lo que indica

que el término al cual acompaña debe interpretarse en el más estrecho o limitado de sus significados, no en el que abarca más.

## INTERDICTO

Término que proviene de *interdictus* de origen latino, cuyo significado etimológico es el de prohibición o mandato para no hacer o decir alguna cosa.

## DELINCUENCIA ORGANIZADA

La delincuencia organizada es la actividad delictiva de un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención de Palermo, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico, político u otro de orden material.

En la sociedad usualmente se comete el error de usar indistintamente los conceptos de crimen organizado y organizaciones criminales. Si bien ambos hacen referencia a un grupo de personas que, buscando alcanzar sus objetivos (que pueden ser riqueza, poder...), realizan acciones que van en contra de la legislación existente; la diferencia central entre estos términos, es que en el primero existen personas con los vínculos necesarios para evitar ser perseguidos por los delitos que cometen o evitar la pena o castigo de los mismos, mientras el grupo criminal no tiene estos vínculos.

El término de delincuencia organizada se ha utilizado recientemente para señalar a grupos de personas que se dedican a traficar drogas, personas, órganos, cometer secuestros, asesinatos, entre otros delitos.



# LÍNEA ÚNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



**0 802 12345**

---

Puede contactarnos en todas las provincias  
y municipios del país

